**IMPEDIMENTOS EN LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY DE JUSTICIA Y
PAZ EN MATERIA DE DDR Y JUSTICIA TRANSICIONAL. ESTUDIO DE CASO:
EL SURGIMIENTO DE LAS BACRIM EN ANTIOQUIA (2006 – 2008)**

LWIDING GABRIEL PÉREZ HERNÁNDEZ

**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
BOGOTÁ D.C., 2016**

“Impedimentos en la aplicación efectiva de la Ley de Justicia y Paz en materia de DDR y justicia transicional. Estudio de caso: el surgimiento de las Bacrim en Antioquia (2006-2008)”

Estudio de caso
Presentado como requisito para optar al título de
Politólogo
En la Facultad de Ciencia Política y Gobierno
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentado por:
Lwiding Gabriel Pérez Hernández

Dirigido por:
Silvia Forero

Semestre I, 2016

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es la culminación de un proceso que inicio gracias a mis padres, a mi papa por ser una inspiración constante a mi mama por su apoyo y paciencia, y a mis hermanos que siempre significaron un apoyo constante.

Quiero agradecer a mi directora, quien decidió acompañarme en la culminación de este proyecto y creyó en mi trabajo.

Finalmente quiero agradecer a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron a la culminación de este proceso, gracias por su apoyo y ayuda y motivación.

RESUMEN

El objetivo de este estudio de caso es demostrar en que medida la incapacidad del Estado influyó en el surgimiento de las Bacrim en el departamento de Antioquia. Para tal fin, se aborda la problemática desde una perspectiva tanto explicativa como analítica, dado que pretende examinar la relación causal entre el fenómeno armado en Antioquia y las causas que llevaron a su surgimiento mediante la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, teniendo como punto de partida la incapacidad estatal en tres niveles: en infraestructura económica para el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración con las Autodefensas Unidas de Colombia, en administración de justicia para el proceso de justicia transicional y para recuperar el monopolio legítimo de la violencia.

Palabras clave: *Incapacidad del Estado, Bacrim, Desarme, Desmovilización y Reintegración, justicia transicional, monopolio legítimo de la violencia.*

ABSTRACT

The objective of this case study is to demonstrate to what extent the State's incapacity influenced the emergence of Bacrim in the department of Antioquia. To this end, the issue is approached from a perspective of both explanatory and analytical, since it seeks to examine the causal relationship between the armed phenomenon in Antioquia and the causes that led to its emergence through the application of the Law of Justice and Peace, with the starting point the incapacity of the State at three levels: economic infrastructure in the Disarmament, Demobilization and Reintegration with the Autodefensas Unidas of Colombia, in justice administration for the process of transitional justice and to retrieve the legitimate monopoly of violence.

Key words: *State's incapacity, Bacrim, Disarmament, Demobilization and Reintegration, transitional justice, legitimate monopoly of violence.*

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	7
1. FALLAS EN DDR, PUERTA ABIERTA A LA CONTINUIDAD DEL CONFLICTO	9
1.1. Falta de infraestructura económica para el proceso de Reinserción	12
1.2. Malestar en comunidades de acogida, discriminación y sugestión de volver a la vida armada como forma de supervivencia	16
1.3. Caso Colombiano, lejos de una superación total del conflicto	19
2. FALLAS EN JUSTICIA TRANSICIONAL, RADIOGRAFÍA DE UN ANDAMIAJE JURÍDICO ENDEBLE	22
2.1. Problemas desde la raíz, abriendo camino a diferentes rutas de impunidad	30
3. SURGIMIENTO DE LAS BACRIM EN ANTIOQUIA, CONVERGENCIA DE CONDICIONES FAVORABLES	39
3.1. Importancia estratégica del departamento y las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio	40
3.2. Ausencia estatal en el territorio, ambiente oportuno para la consolidación de nuevos grupos armados	46
4. CONCLUSIONES	51
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

LISTA DE ANEXOS

- Anexo 1. Mapa. Necesidades Básicas Insatisfechas Antioquia 2005.
- Anexo 2. Mapa. Necesidades Básicas Insatisfechas Antioquia 2010.
- Anexo 3. Tabla. Presencia de grupos narcoparamilitares 2008 – 2010.

INTRODUCCIÓN

En el periodo de 2006 – 2008 se dio el surgimiento de nuevas estructuras armadas en Antioquia, denominadas por organismos de inteligencia, policiales y militares como Bandas Criminales Emergentes¹ -Bacrim-. (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR], 2007, págs. 16-17) Las cuales son consideradas por muchos como sucesores de las AUC, dado que se encuentran estrechamente vinculados a actividades delictivas como la extorsión, contrabando, narcotráfico y lavado de activos (Human Rights Watch, 2010, pág. 26) y cuentan al interior de sus filas tanto con nuevos reclutas y personas vinculadas a la delincuencia común, así como mandos medios y combatientes rasos desmovilizados o no de las AUC. (CNRR, 2007, pág. 16)

Consecuentemente, esto devela fallas en el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración adelantado por el ex presidente Álvaro Uribe en su primer periodo de mandado (2002 – 2006). Lo anterior, en razón de que este proceso, escudado por la Ley 782 de 2002 y después por la Ley 975 de 2005 debía garantizar la reincorporación de los ex combatientes a la sociedad y su no reincidencia en la criminalidad. Ahora bien, a pesar de la multiplicidad de factores que pudieron influir en el surgimiento de las Bacrim, este estudio de caso busca mostrar de qué manera la incapacidad del Estado² influyó en el surgimiento de las Bacrim en el departamento de Antioquia en el periodo de 2006-2008 en el desarrollo de la Ley 975 de 2005.

Por tanto, en primer lugar se da una especial atención a la falta de infraestructura y de poder económico por parte del Estado para llevar a cabo el proceso de DDR con las Autodefensas. Esto con el fin de develar como las fallas en el proceso permitieron a los desmovilizados considerar volver la vida armada como una alternativa sugestiva para vivir. En este punto, la teoría de la *paz positiva* y *paz negativa* de Galtung, permite enmarcar este proceso de paz con una dinámica que facilita la reaparición de un conflicto armado.

¹ Organizaciones criminales significativamente armadas que surgen en la dinámica posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia y que desarrollan actividades de control de grandes negocios ilícitos. (Suárez, sf, pág. 1)

En segundo lugar, se estudia la forma en que la incapacidad estatal en materia de administración de justicia³ generó casos de impunidad en los crímenes cometidos por los desmovilizados. Para ello, se hace uso de las tipologías desarrolladas por Uprimny para caracterizar los procesos de justicia transicional.

En tercer lugar, se expone de qué manera la incapacidad estatal de recuperar el monopolio legítimo de la violencia⁴ y manifestar su presencia en el territorio, permitió que nuevos grupos armados se establecieran en zonas como el Bajo Cauca, Magdalena Medio y Urabá Antioqueño.

Finalmente, es necesario precisar que la incapacidad hace referencia a la carencia de preparación, capacidad, medios o competencia para poder realizar una tarea o labor determinada (RAE, 2014). Por tanto, en lo referente al Estado, esta falta de capacidad para llevar a cabo una labor se ve reflejada en el incumplimiento de los fines para los cuales este fue creado; es decir los consagrados en el artículo segundo de la constitución⁵.

³ “Parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional” (Ley 270, 1996, art. 1).

⁴ El monopolio legítimo de la violencia es una característica fundamental del Estado, mediante la cual, este reclama para sí la capacidad única de ejercer coerción física en todo el territorio de su influencia. De esta manera, puede establecerse que es el Estado el único con la potestad y el derecho de ejercer violencia en su territorio. (Weber, 1919, pág. 2) La incapacidad se refiere a la carencia de capacidades para recuperar esta característica después de haberla perdido por un periodo de tiempo determinado.

⁵ Sobre todo en materia de “defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 2).

1. FALLAS EN DDR, PUERTA ABIERTA A LA CONTINUIDAD DEL CONFLICTO

Con la intención de cumplir el propósito de este apartado, es pertinente realizar un preludeo que exponga el contexto bajo el cual se dio el proceso de *Desarme, Desmovilización y Reinserción* (DDR)⁶ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)⁷. Posteriormente, se hace un bosquejo de las falencias del proceso de DDR a nivel general, para así pasar a develar las fallas del mismo en materia de infraestructura económica en la etapa de reinserción.

El proceso de paz adelantado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tuvo inicio a finales del año 2003 bajo el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), producto del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de Julio de ese mismo año entre: el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión Exploratoria, delegados de la Iglesia Católica y los representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. (Reyes, 2012, pág. 27)

El acuerdo de paz se materializó bajo un proceso de *Desarme, Desmovilización y Reinserción* (DDR), que en sus inicios se vio regido por un marco jurídico compuesto por una ley y tres decretos: Ley 782 de 2002, Decreto 128 de 2003, Decreto 3360 de 2003, Decreto 2767 de 2004 y posteriormente pasó a enmarcarse en la égida de la Ley 975 de

⁶ Los procesos de DDR surgen formalmente después de la Segunda Guerra Mundial como herramientas para alcanzar procesos de pacificación en un escenario de posconflicto. (Saldarriaga, 2013, pág.1) Se dividen expresamente en tres fases. Sin embargo, la segunda fase, la de desmovilización se compone por dos etapas: la de desmovilización y reinserción.

El proceso de *desarme*, como su nombre lo indica, consiste básicamente en recolectar, documentar, controlar y eliminar las armas (pequeñas, ligeras y pesadas junto con explosivos) y las municiones de los excombatientes. Enseguida se emprende la *desmovilización*, en la cual se pretende la “baja oficial” de combatientes activos para pasar a un proceso de *reinserción* consistente en el ofrecimiento de asistencia a corto plazo a los ex miembros de grupos armados con tal de suplir sus necesidades básicas y darles capacitaciones que los preparen para ingresar al ámbito laboral⁶. (Naciones Unidas, 2014, párr. 1 – 3)

Por su parte, la *reintegración* es una realidad social y económica a través de la que se pretende devolver a los excombatientes su estado de civilidad a largo plazo, lo que se logra al integrarlos en un entorno económico y socialmente estable. (Naciones Unidas, 2014, párr. 4) Sin embargo surgen tensiones en torno a cuál debería ser el objetivo ideal del proceso de reintegración, puesto que existen una serie de problemáticas que se deben tener en cuenta a la hora de formular una política pública de reintegración efectiva.

⁷ Las Autodefensas Unidas de Colombia nacen en 1997. Cuando se establece su proceso de desmovilización, se prometen beneficios jurídicos, de salud, generación de ingresos, atención psicosocial a cambio de la dejación de las armas. A pesar de ello, el proceso se dio por bloques y se dio del 2003 al 2006.

2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz, a la cual también se acogieron algunos combatientes guerrilleros. Siendo así, se efectuó un proceso de desmovilización colectiva de paramilitares que pensaba en la reintegración como el fenómeno por medio del cual se consolidaría la política de seguridad democrática.

Las desmovilizaciones colectivas de los bloques de las AUC dieron inicio el 25 de noviembre de 2003 en Medellín con el bloque Cacique Nutibara y terminaron el 15 de agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas. (verdadabierta.com, sf, párr. 2) Sin embargo, a lo largo del proceso de desmovilización, el Estado calculaba alrededor de 15.000 ex combatientes, número que aumentó drásticamente hasta superar los 30.000, (Aristizabal, et al, 2008, pág. 100) lo anterior, significó un problema en materia de reinserción, dado que para estos programas el gobierno no contaba con el presupuesto ni con la infraestructura necesaria para adelantar la tarea. (Aristizabal et al, 2008, pág. 100)

De esta manera, el crecimiento exponencial de los combatientes acogidos al proceso de desmovilización fue visto como un gran éxito por parte del gobierno y de la población colombiana. De la misma forma este proceso significó un pico en la política de seguridad democrática del entonces presidente Uribe. No obstante, se evidenciaron diferentes problemas los cuales desencadenaron un congestionamiento de las instituciones envueltas en el proceso, lo cual fue un claro ejemplo de las falencias del gobierno para la implementación del proceso de DDR, específicamente en la etapa de reinserción de los desmovilizados a la comunidad, dejando al descubierto la falta de preparación del Estado para llevar a cabo un proceso de desmovilización eficaz.

Entre las fallas se encuentran: la falta de capacidad del Estado para ocupar los territorios abandonados por los grupos paramilitares desmovilizados; el gran déficit de información que impidió el esclarecimiento de los hechos, creando impunidad en unos casos y en otros estancamiento del proceso judicial del desmovilizado; la negociación únicamente con los jefes y líderes paramilitares para el desmonte de las estructuras; la falta de rigurosidad por parte del Estado en cuanto a extraer información sobre los contactos y rutas del narcotráfico en el país; y la estigmatización por parte de la sociedad. (Aristizabal et al, 2008, págs. 90-109)

De esta forma, se evidencia que el Estado tuvo una mala formulación, así como una mala implementación de las diversas políticas públicas que acompañaron al proceso de DDR. Como consecuencia no hubo un verdadero esclarecimiento de los hechos, una reparación real a las víctimas ni garantías de no repetición, que permitieran una reconstrucción del tejido social, so pena de lograr que la etapa de reinserción se diera de manera adecuada.

El departamento de Antioquia es emblemático en este sentido, dado que de treinta y seis estructuras paramilitares que se encontraban activas en el país, diez de las desmovilizadas entre el 2003 y el 2006 ejercían control e influencia en diferentes subregiones del departamento de Antioquia. Estos son:

Bloque Elmer Cárdenas, Frente Costanero y Bloque Bananero con influencia en el Urabá; Bloque Mineros con incidencia en el Bajo Cauca y Norte y Bloque Central Bolívar, Frente Nordeste Antioqueño, con incidencia en el Bajo Cauca y parte del Magdalena Medio antioqueño; Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, con incidencia en el Magdalena Medio antioqueño y parte del oriente; Bloque Héroes de Granada en el Oriente antioqueño y Valle de Aburrá, Bloque Cacique Nutibara en Valle de Aburrá; Bloque Suroeste Antioqueño y Bloque Noroccidente Antioqueño. (Comisión Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2014b, pág. 179)

La desmovilización de los bloques mencionados dio un total de 10.203 ex combatientes en el departamento. (Oficina Alto Comisionado para la Paz, sf, págs. 9-90) De lo anterior se sigue que de los 31.671 desmovilizados, el 32% se encontraron ubicado en Antioquia, haciendo de este el departamento con mayor número de ex combatientes en su territorio y de Medellín la ciudad con mayor cantidad de desmovilizados, con un total de 3.037. (Mapp/OEA, 2006, citado por: Alonso, et al. 2008, pág. 15)

En consecuencia, el éxito en materia de estructuras desmontadas, hombres desmovilizados y armas entregadas es innegable. Sin embargo, también existieron ciertas fallas notables que desde el estado embrionario del proceso generaron malestares manifestados en las siguientes etapas.

En primer lugar se encuentra la gran carencia de planeación por parte del gobierno para adelantar los primeros pasos del DDR. La falta de una herramienta jurídica lo suficientemente sólida para guiar el proceso permitió que una cantidad considerable de bloques se desmovilizaran sin la presencia de un marco jurídico adecuado. Esto, ya que la

Ley 782 de 2002, vigente cuando comenzaron las negociaciones con las AUC, solo preveía la amnistía y el indulto a los crímenes políticos cometidos por los miembros de la organización ilegal. (Fiscalía General de la Nación, 2012, párr. 2)

Por tanto, dicha ley no contaba con las herramientas necesarias para hacer frente a la situación y ponía de manifiesto la necesidad de una ley que garantizara sanciones contra las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, la Ley de Justicia y Paz, que contempla estos aspectos, no comenzó a regir sino hasta el 30 de diciembre del 2005.

En segundo lugar, se encuentra la falta de acompañamiento no solo de las instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), que se vincularon al proceso a inicios del 2004 (después de pactados varios acuerdos base del proceso y de la desmovilización de más de mil combatientes), sino también de las instituciones expertas en el tema e instancias del gobierno que debieron ser directamente involucradas, como el gobierno departamental y municipal, los cuales fueron dejados por fuera de las discusiones que regirían el proceso de desmovilización y ni siquiera hicieron parte del diseño de los planes que se implementarían en las etapas inmediatamente posteriores. (Alonso, et al. 2008, págs. 16-17) Asimismo, hubo una falta de comunicación hacia la sociedad civil sobre la finalidad de las discusiones que se estaban adelantando en las mesas de negociación, dejándole así rezagada y completamente desinformada de la realidad del proceso adelantado con las AUC. (Alonso, et al. 2008, pág. 17)

1.1. Falta de infraestructura económica para el proceso de Reinserción

La falta de planeación en la etapa de desmovilización, así como la falta de infraestructura para hacer frente al creciente volumen de desmovilizados no permitieron que las otras etapas del proceso de DDR se desarrollaran correctamente. Consecuentemente, el Estado también se quedó corto en la etapa de reinserción de los desmovilizados tanto en el aspecto económico como social, los cuales van de la mano.

El proceso de reintegración de las desmovilizaciones que se dieron durante el periodo presidencial de Uribe -delegado al Ministerio de Justicia e Interior con el Programa

de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC)⁸- se mantuvo en sus inicios bajo una lógica de reinserción paternalista de corto plazo y con “un enfoque individualista, centrado en el excombatiente que minimizaba el acompañamiento a su familia y comunidad” (Hoyos, 2011, pág.23). El costo para el proceso de DDR para finales del 2007 había alcanzado un total de 227.141 millones de pesos⁹, de los cuales 190.129 millones habían sido invertidos en la etapa de reintegración¹⁰. (Fondo de Programas Especiales para la Paz [fondopaz], Citado por: Alonso, Valencia, 2007, pág. 171)

Dicho programa, tenía en total una duración de 18 meses. Estos iban de la mano con un subsidio de \$358.000 mensuales, la locación de los desmovilizados en unos alberges durante dos años y la dotación de “documentación, ayuda humanitaria, salud, Módulo Cero, (módulo de formación ciudadana, información sobre la ejecución del programa y orientación ocupacional), apoyo psicosocial, [y] educación” (Saldarriaga, 2013, pág. 11), entre otros servicios. Finalmente, a partir de dos años los desmovilizados eran libres de escoger su lugar de residencia.

Como es de suponer, la falta de recursos y de planeación del PRVC dificultó abordar la descontrolada demanda de los excombatientes¹¹ por servicios y auxilios. El departamento de Antioquia destaca en este aspecto, dado que la falta de infraestructura hizo que el proceso tuviera sus inicios en el sotano de la Gobernación, en donde siete funcionarios debían encargarse de los desmovilizados. (VerdadAbierta, 2014, párr. 19) Fue así, que dada la necesidad de una reorganización del programa, en el 2006 se creó la Alta Consejería para la Reintegración que dentro de sus principales reformulaciones del

⁸ La Alta Consejería para la Reintegración (ACR) reemplazaría al PRVC en el 2006. Este cambio también significó un replanteamiento del enfoque del proceso; se pasaría de enmarcar el programa como una reinserción de corto plazo, a una reintegración de largo plazo, buscando la autonomía de los excombatientes. (Hoyos, 2011, p. 22)

⁹ Para las etapas de desmovilización y desarme hubo una inversión de 18.961 millones de pesos. (Fondo de Programas Especiales para la Paz [fondopaz], Citado por: Alonso, Valencia, 2007, pág. 171)

¹⁰ “Según Fondopaz, el costo de las concentraciones y desmovilizaciones asciende a una media de 290 dólares por persona, lo que sumaría otros 5,8 millones de dólares para el conjunto de las AUC. De estos 290 dólares, 70 corresponden a los gastos de alojamiento, 58 a alimentación, 38 a ropa y 30 a traslados. La suma de todos estos conceptos manejados por Fondopaz es de 62,5 millones de dólares, a una media de 3.125 dólares por desmovilizado” (Cf. Escola de Cultura de Pau y Agencia Española de Cooperación Internacional, 2007, pág. 4, Citado por: Alonso, et al. 2008, pág. 20).

¹¹ Francy Carranza (2012, pág. 6) expresa este punto de manera clara al demostrar que cuando el PRVC fue designado como programa nacional en el 2002, se pasaría de haber atendido 7500 desmovilizados a atender 16, 696 en el transcurso de solo dos años.

programa tuvo: el aumento en la vigilancia de los montos económicos otorgados a los desmovilizados; el desmonte de los alberges por ubicaciones individuales; y un condicionamiento del recibo de auxilios al cumplimiento de unos requerimientos, metas y objetivos. (Hoyos, 2011, pág. 28)

En este contexto se buscó una descentralización del proceso de reintegración, al situarlo en las agendas políticas y económicas de las entidades territoriales con la intención de que las autoridades municipales atendieran de forma más cercana, acertada e integral a los desmovilizados en su proceso de reintegración social, económica y política. De este modo, se da una responsabilidad compartida entre los municipios y las autoridades nacionales para el control de recursos y la coordinación de tareas. Sin embargo, los programas de reintegración pensados desde el nivel local brillaron por su ausencia, debido a que las entidades regionales resintieron el no ser consultadas durante el proceso de planeación de la política de reintegración nacional (Labrador & Gómez, 2010, págs. 307-308) como se mencionó anteriormente.

La naturaleza de los programas productivos y de capacitación no conocen a profundidad los intereses de los desmovilizados. Intentan formarlos como empresarios para que hagan parte del sector productivo sin que existan las condiciones económicas necesarias para que puedan progresar¹². Muestra de lo anterior es que en Antioquia, de los 8.360 desmovilizados que hacían parte del programa de reinserción para el 2008, solo 1.881 (22,5%) hacían parte de programas de formación para el trabajo, 96 (1,14%) se encontraban desarrollando proyectos productivos y únicamente 21 (0,25%) se encontraban trabajando. (Fundación Social, 2009, pág. 85)

La carencia de una constante económica lo suficientemente robusta que permita a los desmovilizados atender sus necesidades y las de sus familias produce inestabilidades en el proceso, ya que su fuente de ingresos se reduce en muchos casos a los subsidios otorgados en el programa. Estas inestabilidades, se vieron agravadas por los retrasos en el pago del apoyo económico a los desmovilizados – en el departamento de Antioquia la ACR reconoció que se debía a un cambio en el software en la implementación de pago por

¹² La evidencia soporta la desconfianza de los desmovilizados ante los programas productivos del gobierno. En gran medida porque el 60% de estos programas que se han articulado a procesos de desmovilización de grupos armados históricamente han fracasado. (Aristizabal et al, 2008, pág. 102)

resultados –, generando desconfianza y falta de credibilidad en el programa, y a su vez aumentando el riesgo de la consideración de una alternativa diferente a la reintegración por parte de estos. (Fundación Social, 2009, pág. 90)

Por tanto, la falta de garantías laborales que permitan al desmovilizado salir de su estado de vulnerabilidad económica y consolidar su capacidad de generar ingresos de manera autónoma y legal, sumadas a la incapacidad del Estado de garantizar una estabilidad económica generaron inseguridades en el proceso. Esto, ya que los desmovilizados podían verse tentados por ofertas de grupos paramilitares no desmovilizados para volver a la vida armada, que ante este panorama se presenta como una alternativa bastante sugestiva para subsistir. (Aristizabal et al, 2008, pág. 102)

De la misma manera, el aspecto social y comunitario son fundamentales para que se pueda dar un efectivo proceso de reincorporación a la vida civil por parte de los desmovilizados en un proceso de DDR. Según Herrera, Suarez y Thylin (2001, págs. 15 – 16) la reintegración social es un proceso que busca reintegrar al individuo en la sociedad civil. Esta instancia varía según: la duración del conflicto, el tiempo que permanecieron los individuos en los grupos armados, los efectos que generó la violencia en la comunidad de acogida, el restablecimiento de redes informales y formales y el grado de relacionamiento entre la reintegración social y la reintegración económica como un puente entre los desmovilizados y la comunidad. También se contemplan estrategias de reintegración psicológica y psicosocial.

Por su parte, la reintegración comunitaria surge de la realización de que un excombatiente debe reintegrarse a una comunidad determinada. Por lo cual se debe trabajar con la comunidad en aras de garantizar un ambiente propicio para la reconciliación en el cual el desmovilizado no sea estigmatizado como victimario. Según Gleichman, Odenwald y Wilkinson (2004) por medio del enfoque comunitario se busca sensibilizar a la comunidad con tal de reducir prejuicios y que en lugar de ello esta ayude a enfrentar traumas.

Consecuentemente, el seguimiento y apoyo social es imperativo para lograr un proceso de reinserción exitoso en el marco del posconflicto. Es a través de este que se puede lograr un efectivo proceso de reconciliación entre los desmovilizados y la

comunidad, permitiendo restaurar el tejido social fragmentado por el conflicto. Así que se hace necesaria una política de reintegración que permita una reconciliación efectiva entre los excombatientes y sus respectivas comunidades de acogida.

En este sentido, la ley de Justicia y Paz propone unas garantías que en últimas permitirían la reconciliación entre víctimas y victimarios: verdad y reparación. No obstante, como se explica mas adelante, la naturaleza misma del proceso, sumado a los problemas en materia de justicia transicional y esclarecimiento de los hechos impide una real reparación y reconocimiento a las víctimas, creando malestar a la hora de recibir a los desmovilizados en la comunidad.

Los programas ofrecidos por el gobierno para la etapa de reinserción de los desmovilizados, ofrecen capacitación a estos y los preparan para integrarse a la vida civil. Esto se da a través de programas productivos, capacitación laboral, programas de educación básica y secundaria e incluso ayuda psicológica y psicosocial como se expuso anteriormente. No obstante, se deja de lado a la población civil en este aspecto y no se ofrecen programas orientados a las comunidades que van a recibir a los ex combatientes en el proceso de reinserción.

1.2. Malestar en comunidades de acogida, discriminación y sugestión de volver a la vida armada como forma de supervivencia

La ausencia de programas orientados a las comunidades de llegada de ex combatientes constituye una falla estructural en el proceso de DDR, dado que es la comunidad quien tiene que enfrentarse con los desmovilizados en su cotidianidad, convivir con ellos, ofrecerles oportunidades laborales, integrarlos al núcleo social y en últimas hacerles sentir parte de la sociedad. Esto, con el propósito de que no contemplen el retorno a la vida armada como alternativa de subsistencia, pero para ello se requiere un mayor diálogo y concertación entre las partes. (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo [PNUD], 2005, pág. 5)

La falta de estas medidas ha llevado a que se generen malestares en las comunidades que sirven de residencia a los desmovilizados, manifestadas en actos de intolerancia por la

idea de tener que convivir con ellos. Entre estos actos se encuentran principalmente protestas pacíficas, amenazas a los desmovilizados, violencia contra estos y en últimas su asesinato – para octubre del 2005 había un total de 177 ex combatientes muertos, de los cuales 104 provenían de desmovilizaciones colectivas realizadas por el gobierno. (PNUD, 2005, pág. 3) Entre los tipos de agresiones, amenazas y represalias se encuentran también por parte de grupos ilegales no desmovilizados con el fin de garantizar la no colaboración de los reinsertados con la policía o la justicia. (ideaspaz.org, 2010, pág. 5)

Esta intolerancia ha derivado en un aumento desmesurado de la violencia hacia los desmovilizados. Muestra de ello fue el aumento en relación con las cifras anteriormente mencionadas que se dio en Antioquia, que para el 2008 dejó un saldo total 110 desmovilizados muertos por homicidio en el departamento, (Fundación Social, 2009, pág. 91) cifra alarmante si se tiene en cuenta que para ese mismo periodo la gran mayoría de los departamentos experimentó una disminución notable de la violencia contra los excombatientes, (Serrano, 2009, párr. 8) dejando a Medellín y Valle de Aburra como los lugares mas afectados por estas oleadas de violencia. (ideaspaz.org, 2010, pág. 6)

Así mismo, esta discriminación y posterior marginación de la comunidad en contra de los desmovilizados también es posible de divisar en la esfera económica desde los inicios del proceso de reinsertión. Dado que la sociedad es la encargada de dar trabajo a los desertores de la guerra, esta misma se ha encargado de rezagarlos en este sentido. Lo anterior, en parte porque estos deben someterse al término “desmovilizado” o “reinsertado”, que sirve de etiqueta para estigmatizarles, irrumpe en la cotidianidad y genera desconfianza en la comunidad al momento de emplearles o simplemente de tratar con ellos. (Aristizabal et al, 2008, pág. 104)

De esta manera, se mantiene a los desmovilizados al margen de la esfera productiva asociada a la comunidad. Ejemplo de esto es que para el año 2005 de los 868 combatientes desmovilizados del bloque Cacique Nutibara en el departamento de Antioquia, solo 10 se pudieron vincular al sector privado, a causa no solo de la falta del acompañamiento del Estado, sino a la falta de compromiso del este sector para emplear a ex combatientes. (PNUD, 2005, pág. 3)

Con el paso del tiempo al contrario de lo afirmado por el gobierno, la desconfianza del sector privado y de la comunidad en general hacia los desmovilizados no ha cambiado tanto como se esperaba¹³. Sí bien los actos de violencia hacia estos ha disminuido considerablemente, el número de empresas que para finales del 2014 se encontraban vinculadas a la etapa de reintegración en el departamento de Antioquia no superaban las 40. (verdadabierta.com, 2014, párr. 17)

Este rechazo social y económico al que se ven sometidos algunos desmovilizados resulta aún más dañino para el proceso de DDR en su conjunto, dado que les permite contemplar el retorno a una vida armada de una manera aún más sugestiva. Volver a la guerra como forma de supervivencia les garantiza volver a un entorno con el que están familiarizados y en el que saben como desenvolverse. Asimismo, su reclutamiento se vuelve más fácil que el de una persona que no conoce el medio, dado que los desmovilizados constituyen “mano de obra capacitada” para los grupos armados al margen de la ley.

Bajo esta dinámica de descontento social con los desmovilizados también se encuentra una sensación del privilegio de estos, frente a otros actores del conflicto. El disgusto se hace mas grande gracias a los subsidios y capacitaciones que funcionen o no, el Estado otorga a los desmovilizados con el propósito de permitirles ingresar a la vida civil, dejando de lado a las víctimas que en muchos casos no ven siquiera el esclarecimiento de los hechos; no consiguen verdad ni reparación, como se explica más prolijamente en el siguiente capítulo.

En este sentido, algunos autores arguyen que no se deben dar capacitaciones y subsidios a los ex combatientes, que lo ideal es devolverles a la situación de pobreza de la que muchos provienen. Las necesidades sociales y económicas de aquellos que utilizaron la violencia de forma ilegal no deben primar sobre las de otros actores del conflicto como desplazados, veteranos y discapacitados de las fuerzas armadas o víctimas de la sociedad civil. Asimismo, están quienes argumentan que el objetivo a alcanzar en un proceso de reintegración debe ser más ambicioso, pues se debe procurar la otorgación de beneficios

¹³ Para el 2012 “80 de cada 100 creen que se puede lograr la paz, pero solo la mitad daría empleo a un desmovilizado” (verdadabierta.com, 2014, párr. 17).

que le permitan al desmovilizado alcanzar y tener la esperanza de mantener condiciones de vida social y económicamente estables. (McMullin, 2013, pág. 9)

Lo anterior, en aras de que los desmovilizados no decaigan en la misma situación social y económica en que estaban al momento de ingresar a los grupos armados. Ello implicaría un aumento en la tentación de volver a sus antiguos grupos armados ilegales y sería un riesgo para cualquier proceso de paz. (McMullin, 2013, págs. 18-19)

Se hace necesario entonces el uso de herramientas lo suficientemente sólidas que funcionen paralelamente al proceso de reintegración en el panorama del posconflicto, como las reformas al sector de seguridad y justicia transicional. Esta última, es por su parte otra etapa sumamente importante para un escenario de posconflicto¹⁴, dado que constituye el elemento mediante el cual se realiza la reparación de los derechos de las víctimas de una violación sistemática de Derechos Humanos, (International Center for Transitional Justice [ICTJ], 2014, párr. 1-3) y por tanto es el encargado de mitigar los descontentos de la población con las prebendas que el Estado otorga a los combatientes sometidos al proceso de DDR. Esto, a través de los mecanismos de administración de justicia y esclarecimiento de hechos como se explica mas detalladamente en el siguiente capítulo.

1.3. Caso Colombiano, lejos de una superación total del conflicto

Ante este panorama de creciente descontento y rechazo por parte de ciertos sectores de la sociedad a los desmovilizados, acciones de marginación e intolerancia y eventual retorno de algunos reinsertados a la ilegalidad, se puede divisar que el caso colombiano se encuentra lejos de un marco de superación total del conflicto. De hecho, dista mucho de un panorama que permita frenar las dinámicas de violencia, el caso colombiano puede ubicarse dentro de lo que Johan Galtung denomina *paz negativa*.

Para Galtung el concepto de paz se divide en dos, la *paz positiva* y la *paz negativa*. La *paz positiva* es aquella que se da mediante la transformación del conflicto por medios

¹⁴ Posconflicto puede entenderse como: “Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo.” (Universidad del Rosario, sf, párr. 1).

pacíficos que puedan solventar las causas subyacentes de los conflictos que producen violencia, a través de la cooperación activa entre los grupos en pro de alcanzar un beneficio mutuo. (Galtung, 1996, págs. 9-11) Por su parte, la *paz negativa* hace referencia a la simple disminución o ausencia de conflicto, (Galtung, 1996, pág. 9) que no se ocupa de atacar las causas de la violencia, lo que puede conducir a una violencia de mayor magnitud en el futuro.

En este orden de ideas, la forma en que el Estado colombiano llevo a cabo el proceso de DDR no atacó a las causas subyacentes al conflicto. La forma en que se desarrolló el proceso devela carencias importantes que analizadas desde un principio permitían vaticinar fallas en la tercera y mas importante fase del proceso: la etapa de reinserción, dado que estas constituyen fallas estructurales que son transversales a la totalidad del proceso.

La falta de seguimiento de la comunidad internacional, la falta de comunicación sobre el proceso a la población civil y otros sectores interesados, la exclusión de los gobiernos regionales y locales (que eran en últimas quienes debían ayudar a diseñar las estrategias de reintegración en sus respectivos departamentos), el no acompañamiento de la comunidad y la falta de énfasis en la reconciliación son fallas que recorren la estructura del proceso y muestran a todas luces los males que presenta desde su gestación.

En suma, los vicios del proceso materializados en la etapa de reinserción, junto al descontento de la población, su desconfianza y actitud de rechazo hacia los desmovilizados llevó a algo mas que tensiones en el desarrollo de esta fase. Lo anterior lleva a los reinsertados a una situación de duda sobre su permanencia en el proceso de DDR, a su sometimiento a la justicia, a su nueva condición de vulnerabilidad frente a un contexto nuevo para muchos; el cual les desconoce, no les acepta y ataca. (Aristizabal et al, 2008, pág. 104)

En este contexto los desmovilizados tentados por ofertas de grupos armados ilegales consideran volver al negocio en donde conocen los métodos, contactos y se han desempeñado gran parte de su vida. La deserción de los desmovilizados en el proceso y su vuelta a actividades ilegales y en casos extremos a la vida armada representan una grieta

enorme a través de la que se escapa la oportunidad de frenar las dinámicas de violencia en el país.

El regreso a la ilegalidad de algunos desmovilizados y el surgimiento de nuevas estructuras armadas que cuentan con estos dentro de sus filas en el departamento de Antioquia al igual que en diferentes zonas del país, muestran una falta de planeación, infraestructura y ejecución en el proceso de DDR. Por tanto, estas consecuencias lejos de garantizar una paz que pueda considerarse como definitiva, muestran que la forma en que se ha ejecutado la política pública de reinserción es una puerta abierta a la persistencia de las causas que producen violencia, a la generación de más tensiones entre las partes del conflicto y en últimas la conducción a una violencia de mayor magnitud en el futuro.

2. FALLAS EN JUSTICIA TRANSICIONAL, RADIOGRAFÍA DE UN ANDAMIAJE JURÍDICO ENDEBLE

El marco jurídico bajo el cual se llevarían a cabo las primeras desmovilizaciones estaba compuesto por la Ley 782 de 2002, vigente cuando comenzaron las negociaciones con las AUC, que solo preveía la amnistía y el indulto a los crímenes políticos cometidos por los miembros de la organización ilegal. (Fiscalía General de la Nación, 2012, párr. 2) Por tanto, dicha Ley no contaba con las herramientas necesarias para hacer frente a la situación y ponía de manifiesto la necesidad de una Ley que garantizara sanciones contra las violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.

De esta forma, ante la necesidad de una ley que contemplara los aspectos mencionados nace la Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz. Surge como la herramienta jurídica que abre el camino hacia un acuerdo de paz, que facilita a su vez la reincorporación colectiva e individual de los desmovilizados y garantiza la reparación de las víctimas. (Fiscalía General de la Nación, 2012, párr. 2)

Siendo así, la Ley de Justicia y Paz surgió como la herramienta que dicta las disposiciones para la reincorporación individual o colectiva de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. Siempre y cuando existiera un compromiso por parte de los desmovilizados para contribuir de manera efectiva al alcance de la paz nacional, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación al mismo tiempo que se establecen otras disposiciones para acuerdos humanitarios. (Ley 975, 2005, párr. 2 – art. 1)

La ley consta de doce capítulos y aborda los temas esenciales para llevar a cabo el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Tales como los requisitos para la desmovilización colectiva e individual (Art. 11 – 12), los principios para la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil (Art. 66), la entrega de los menores integrantes de estos grupos (Art. 64) y las características para la rehabilitación de los desmovilizados para garantizar una correcta reinserción de estos a la comunidad (Art. 47).

Dicha ley se expidió bajo un marco de justicia transicional, etapa sumamente importante para un escenario de postconflicto, dado que constituye el elemento mediante el cual se realiza la reparación de los derechos de las víctimas de una violación sistemática de Derechos Humanos. En otras palabras:

La justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. Al tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fomentando la confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho. (International Center for Transitional Justice [ICTJ], 2014, párr. 2)

A su vez, la Justicia transicional cuenta con una serie de elementos que si bien no hacen parte de una lista específica¹⁵, existen cuatro que según el Centro Internacional para la Justicia Transicional (2014), son los más influyentes y se encuentran interrelacionados practica y conceptualmente. Estos son: acciones penales, que deben emprenderse contra los perpetradores de los crímenes contra la población; reparaciones, entendidas como las medidas que adopta el gobierno para reconocer a las víctimas y las acciones compensatorias a las mismas; la reforma de instituciones públicas, dado que es necesario reformar las instituciones que estuvieron implicadas en esos hechos o fueron incapaces de impedirlos, con el fin de garantizar la no repetición; y las comisiones de verdad, que hacen parte de los múltiples mecanismos de investigación que tienen por objetivo el esclarecimiento de los hechos. (ICTJ, 2014, párr. 7 – 13)

Por tanto, la Ley aborda los temas esenciales para llevar a cabo el proceso de Justicia Transicional de manera exitosa. Entre estos se encuentran los principios procesales, la investigación y el juzgamiento de los desmovilizados (capítulos III Y IV), el derecho a la reparación de las víctimas, su papel ante la administración de justicia y las instituciones creadas con el propósito de ejecutar los fines de la Ley (Capítulos XIX, VIII y VII).

Sin embargo, dicha normatividad ha sido objeto de varias críticas desde su entrada en vigencia, las cuales se fueron acentuando con el tiempo. Esto se dio principalmente porque ha sido considerada como insuficiente para hacer frente a la reintegración de los

¹⁵ Cada Gobierno tiene la autonomía de emplear todas las medidas que considere necesarias para las víctimas del conflicto. Ya que cada conflicto obedece a un contexto específico que puede requerir más medidas o acciones diferentes a las expuestas.

desmovilizados a la sociedad, así como en materia de reparación y garantías de no repetición a las víctimas. (VerdadAbierta.com, 2007, párr. 10) De la misma manera, algunos de sus detractores también alegan que la inexistencia de un sistema adecuado y de instituciones con la suficiente capacidad para vigilar el cumplimiento de las condiciones legales a las que se someten los desmovilizados, para gozar de los beneficios del proceso de justicia y paz son características que conducen a un futuro lleno de procesos penales con un alto grado de impunidad¹⁶. (Arango, 2010, párr. 17)

En vista de lo anterior, se han presentado un gran número de críticas y demandas a diversos artículos de la misma Ley. Por parte de organizaciones de mujeres, de derechos humanos, campesinos, sindicales y personas naturales que alegan la inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69 de la ley 975 de 2005 ante la Corte Constitucional, así como los artículos 70 y 71, y la solicitud de la declaración de inconstitucionalidad total de la Ley por no haber sido tramitada como ley estatutaria. (Comisión Colombiana de Juristas, 2005b, págs. 1 – 2)

Lo anterior se debe a que por un lado no se garantiza una pena privativa de la libertad que sea efectiva acorde con los crímenes cometidos por los desmovilizados – mayor de 5 y menor a 8 años de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración con la Justicia (art. 29) – . Y por el otro lado, tampoco se exige una confesión fidedigna por parte de los mismos, desembocando en procesos con verdades a medias que no permiten un verdadero esclarecimiento de los hechos.

Por otro lado, la Ley de Justicia y Paz solo aplica para aquellos desmovilizados postulados por el Gobierno Nacional y que según la Justicia Colombiana han cometido delitos atroces o graves violaciones de derechos humanos. Es decir, se acogen a este proceso las personas que no fueron acogidas por los beneficios de la Ley 782 de 2002; quienes al momento de su desmovilización contaran con procesos abiertos por crímenes no amnistiables y no indultables. Por tanto, el rango de aplicación de la ley es bastante limitado, si se tiene en cuenta que para el 2008 del grueso total de desmovilizados,

¹⁶ “En su versión literal, impunidad significa ausencia de castigo. Ante la existencia de una violación de los derechos humanos, el sistema judicial penal diseñado para llevar a juicio y castigar a los responsables se encuentra ausente o no entra en funcionamiento.” (Tyler, citado por: Escobedo, 2013 pág. 14).

únicamente el 10% había sido postulado para este procedimiento. (Fundación Social, 2009, pág. 105)

La laxitud con que se llevan a cabo las audiencias de las versiones libres se muestra por un lado en el papel mínimo de las víctimas en ellas, quienes pueden hacer acto de presencia, pero no pueden pronunciarse en ningún momento. De hecho, el papel de las víctimas se ve tan reducido, que se limita a la solicitud y participación en el incidente de reparación, el cual se lleva a cabo después de la audiencia en la que los victimarios confiesan sus crímenes y “aceptan” los cargos. (Comisión Colombiana de Juristas, 2005a, pág. 3)

De la misma forma, esta dinámica se presta para que los desmovilizados no confiesen la totalidad de sus delitos y oculten hechos, al mismo tiempo que retienen información valiosa para la justicia. Como: corredores de droga, contactos en negocios ilícitos, ubicación de cultivos, locación de fosas comunes y demás, que imposibilitan un avance íntegro en la construcción de memoria, verdad y esclarecimiento de los hechos para las víctimas, así como frenan y retrasan la posibilidad de acabar con los negocios ilícitos que mueven los intereses económicos de estos grupos armados al margen de la ley.

La falta de rigurosidad con la que son llevadas a cabo estas audiencias se extiende hasta la forma en que son impartidas las penas. Ya que no existe una pérdida real de los beneficios otorgados por la ley de justicia y paz a los desmovilizados que no hagan una confesión completa y fidedigna, en cuyo caso, de ser grave el delito omitido, la única sanción que se impone es la del aumento de la pena en un 20%. Sin embargo, de ser demostrada la intencionalidad de tal omisión (art. 25) – algo prácticamente imposible –, ahí sí se puede presentar una pérdida de los beneficios obtenidos por la ley. (Comisión Colombiana de Juristas, 2005a, pág. 3)

Adicionalmente, desde un principio puede observarse de manera directa la incapacidad del Estado no solo en materia de administración de justicia, sino también en los mecanismos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, factores fundamentales para el proceso de Justicia Transicional. Lo anterior, dado que veinte fiscales tenían 180

días¹⁷ para hacer efectivas investigaciones de violaciones de derechos humanos sistemáticas y masivas (art. 18), haciendo de estos plazos bastante cortos y en la mayoría de los casos absolutamente insuficientes. (Comisión Colombiana de Juristas, 2005a, pág. 3)

Los limitados plazos de investigación imposibilitaban las tareas a los encargados de esta labor en las diferentes etapas del proceso, lo que inclinaba la balanza a favor del desmovilizado. En un primer momento, la Fiscalía debía en un plazo de 6 meses investigar la posible participación en delitos cometidos por desmovilizados de una lista de postulados antes de que estos rindieran su versión libre ante las autoridades. (Aristizabal et al, 2008, pág. 255) De no ser así, el desmovilizado podría acogerse a un marco jurídico mucho menos riguroso: la Ley 782 de 2002, apoyandose en las dificultades institucionales y recibiendo por esta vía indultos y beneficios establecidos en el Decreto 128 de 2003. (Aristizabal et al, 2008, pág. 249)

El segundo momento se llevaría a cabo en las Salas de Justicia y Paz¹⁸, las cuales están conformadas por magistrados, quienes se encargan de “juzgar a los desmovilizados que han sido postulados por el gobierno al proceso de Justicia y Paz, siguiendo los pasos establecidos en la Ley: versión libre, imputación de cargos, legalización de cargos, incidente de reparación y lectura de sentencia”. (ICTJ, sf, párr. 3) No obstante, allí la situación no era muy diferente a la del primer momento.

Lo anterior, dado que cada juez de la Unidad de Justicia y Paz debía hacerse responsable de la investigación de dos o tres bloques en periodos muy limitados de tiempo con un equipo de no mas de siete investigadores, lo que debilitó considerablemente la acción de estos y les impidió avanzar con efectividad y rapidez. Además, a esto se le suma un agravante, que consiste en que los investigadores de estos equipos para realizar la investigación de los crímenes cometidos por los desmovilizados, debían ir a los lugares donde estos ocurrieron, muchos de los cuales son bastante apartados; tarea que sin los recursos ni medios necesarios impide un verdadero esclarecimiento de los hechos. (Aristizabal et al, 2008, pág. 98)

¹⁷ El plazo original establecido en la Ley de Justicia y Paz era de sesenta días, pero dada la insuficiencia de este, fue aumentado a 180 días por medio del artículo 6 del Decreto 4760 de 2005.

¹⁸ Creadas para poner en marcha el mecanismo especial de justicia establecido por la Ley 975 de 2005. Creadas en los Tribunales Superiores de Medellín, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga.

De esta manera se puede apreciar como el avance de los procesos judiciales en materia de justicia y paz empezaba a retrasarse desde un primer momento, lo que con el creciente volumen de desmovilizados iba agravando la situación. No siendo suficiente con la gigantesca desproporción entre las penas, la cantidad de beneficios y prevendas ofrecidas a estos en comparación con la reparación ofrecida a las víctimas (cuya razón se explica más adelante en este mismo capítulo). También se permitió que los desmovilizados inclusive se acogieran a un marco jurídico más laxo, que omitieran información, hechos, contactos, propiedades y negocios ilícitos en sus confesiones.

La inoperancia del aparato judicial frente a la cantidad de crímenes cometidos contra la población, no solo en términos de plazos, sino en términos de laxitud en las investigaciones ha arrojado un resultado nada alentador para las víctimas. Son las víctimas quienes sufrieron las atrocidades de la guerra y quienes no pueden hacer mas que observar a sus victimarios quedar libres, pagar penas muy cortas en relación con sus crímenes y ocluir en su confesión hechos que permitirían su reconocimiento como víctimas y la construcción de una verdad integral.

En este sentido, Antioquia posee una serie de características que le permiten destacarse frente a otros departamentos y convertirse en un caso emblemático del tema en cuestión adelantado por la Ley de Justicia y Paz. La presencia de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia a lo largo de la historia fue tal que le permitió a estos asentarse en vastas zonas del territorio y establecer sus redes de negocios, bases de operación y ejercer influencia sobre la población del departamento.

No por nada en Antioquia se desmovilizaron diez de las treinta y seis estructuras paramilitares activas cuando comenzó el proceso de desarme y desmovilización en el país. Este proceso dió un total de 10.203 combatientes acogidos a él en el departamento, significando el 32% de los 31.671 ex combatientes desmovilizados en todo el país (Mapp/OEA, 2006, citado por: Alonso, et al. 2008, pág. 15) como se explicó en el capítulo anterior. De la misma, forma cabe resaltar que entre estos bloques de las AUC desmovilizados se encuentran bloques reconocidos por su influencia, número de combatientes y crímenes que les son atribuidos. Como son el Bloque Elmer Cárdenas, el

Bloque Mineros, el Bloque Cacique Nutibara y Heroes de Granada. (Comisión Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2014b, pág. 179)

Por tanto, ha sido Antioquia uno de los departamentos que más ha sufrido los horrores de la guerra, dejando víctimas de asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzoso por crímenes como las masacres de: Mutatá, Sabanalarga, Miraflores, Aro, Ituango y Dadebia en 1997; Mutatá, Urrao, Sabanalarga, San Carlos, Remedios y Yolombó en 1998; Yolombó, Heliconia y Concepción en 1999; Yarumal y Urrao en el año 2000; Yolombó (dos veces: el 4 de enero y el 16 de abril), el Peñol, San Carlos, Remedios y Alejandría en el 2001, todos cometidos por grupos paramilitares¹⁹. (Semana.com, 2015)

Solamente si se toman los cinco años anteriores al inicio de las negociaciones en el año 2002²⁰, se puede ver el gran número de víctimas del conflicto armado en el departamento. Esta cifra siguió en aumento, aunque en menor medida, en los años posteriores hasta el 2005, año hasta el cual la Ley de Justicia y Paz contempla a víctimas para reparación por el conflicto bajo su marco legal. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2012, págs. 15 – 22)

En 1997, se registró un total de víctimas en el departamento de 42.967 según el Registro Único de Víctimas (RUV), cifra que obedece a un aumento que se había venido dando, pero que es significativo, dado que el número de víctimas aumentó en 15.000 comparado con el año anterior. (Red Nacional de Información [RNI], 2015) En 1998, esta cifra aumentó casi en 10.000 personas, llegando a las 52.385 víctimas, cifra que se mantuvo en 1999 con un aumento de 318 víctimas, (RNI, 2015) lo que podría verse como una meseta en la escala creciente de la violencia en el departamento, teniendo en cuenta el aumento que se venía registrando en años anteriores. Sin embargo, esta escala alcanzaría su punto más alto en el año 2000 y 2001, en donde se presentaron unas cifras absolutamntne

¹⁹ Para información mas detallada consultar: Línea del Tiempo: CRONOLOGÍA, en Semana.com. 2016.

²⁰ Se precisa en los cinco años anteriores al inicio de las negociaciones con las AUC en este punto, dado que estas nacen en 1997, y en el año siguiente el entonces presidente Andrés Pastrana (1998 – 2002) inició un proceso de negociacion con el grupo de las FARC en el Caguán, cuestión considerada por muchos como la entrega de esta zona a las FARC mediante el abandono de la función estatal en el territorio. (Acevedo, et al, 2008, pág. 13) En este contexto las AUC impulsadas por el descontento de varios sectores de la población, se permitio que estas “crecieran en número de combatientes, extendieran su alcance geográfico y ampliaran su fuerza política” (Romero, 2003, pág. 41). Por tanto, el aumento del número de víctimas en este periodo se enmarca bajo esta dinámica, llegando al momento de mayor fortaleza de las AUC.

fuera de toda proporción, llegando a 119.556 y 135.774 víctimas respectivamente. (RNI, 2015)

En total, solo en estos cinco años Antioquia presentó un total de 403.375 hechos victimizantes²¹ por crímenes como: abandono o despojo de tierras, homicidio, actos terroristas, amenazas, desplazamiento, desaparición forzada, pérdida de muebles o inmuebles, delitos contra la integridad sexual, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, entre otros. (RNI, 2015) Asimismo, hay que tener en cuenta que este departamento se encuentra por encima del promedio nacional en cuestiones como el desplazamiento forzado. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2013, pág. 32)

Entonces, resulta bastante escandaloso que el papel de las víctimas se vea tan disminuido, que la balanza se incline a favor del desmovilizado como se expuso anteriormente, incluso permitiendo a este acogerse a un marco jurídico mas endeble que el ofrecido por la Ley de Justicia y Paz. A lo que se suma la posibilidad de ocluir información valiosa para acabar con negocios ilícitos, así como de crímenes que impiden a las víctimas acceder a una reparación integral; todo esto sin recibir un castigo acorde con la severidad de la falta.

Lo anterior constituye una grave falla en el proceso de construcción de una paz estable. Además de llevar a casos con alto grado de impunidad, también interfiere con la restitución de los derechos de las víctimas entendidos de forma integral, impidiendo así el avance en la construcción de memoria colectiva y el efectivo reconocimiento de las víctimas.

Por un lado, se encuentra el derecho a la verdad, que incluye: conocer los responsables de los crímenes, sus razones, las circunstancias de estos, la forma, el lugar en que fueron llevados a cabo y la ubicación de las víctimas desaparecidas o asesinadas. (Aristizabal et al, 2008, pág. 193) Por otro lado, se encuentra el derecho a la reparación, que contempla: restitución de la víctima, su rehabilitación, indemnización por daños físicos o emocionales o por pérdidas materiales, una satisfacción y garantías de no repetición. (Aristizabal et al, 2008, pág. 194) En suma, el Estado colombiano sacrificó mucho en

²¹ Se habla de hechos victimizantes porque el reporte muestra el número de víctimas por año. La suma de los valores de la tabla no necesariamente refleja el total de víctimas únicas, debido a que una persona puede haber reportado hechos en varios años.

materia de administración de justicia por alcanzar y defender una paz negativa tan inestable como se expuso en el acápite anterior.

No obstante, esta tendencia a dar prebendas y privilegios a los desmovilizados en comparación con el trato que se da a las víctimas, encuentra su fundamento en la forma que fue concebido el proceso, como se muestra a continuación.

2.1. Problemas desde la raíz, abriendo camino a diferentes rutas de impunidad

Todo proceso de justicia transicional puede ser controvertible hasta cierto punto, dado que estos están diseñados para solventar la tensión constante que se produce entre paz y justicia. El caso colombiano no es ajeno a esta realidad y por tanto se encuentra en medio de una disyuntiva transversal a todos los casos: que significa el sacrificio total o parcial, bien sea de justicia o paz en pro de la otra. (Uprimny, 2006, pág. 32) Es así como a pesar de su diversidad contextual y herramientas empleadas para su implementación, los procesos transicionales pueden ser clasificados de acuerdo con la forma en que se abordan las tensiones entre justicia y paz.

Ante esta cuestión, Rodrigo Uprimny ha diseñado dos de las tipologías más sugestivas que permiten interpretar los procesos de justicia transicional desde esta perspectiva, en función de su contenido y de la forma en que fueron diseñados, permitiendo ilustrar las fallas de estos procesos como se expone a continuación. La primera tipología permite encasillar a los procesos de justicia transicional en diferentes tipos:

En primer lugar están los *perdones amnésicos*, estos se encuentran más orientados hacia lograr la paz que la justicia y por tanto a facilitar las negociaciones entre los actores y la reconciliación nacional a través del olvido, en función de esto presentan amnistías generales en donde no se contemplan medidas para el esclarecimiento de los hechos, construcción de verdad integral o reparación de las víctimas; (Uprimny, 2006, pág. 23) en segundo lugar se ubican los *perdones compensadores*: cuentan también con amnistías generales que van de la mano con las comisiones de verdad y que, se rigen bajo la lógica de compensar el perdón otorgado a los responsables a través de la construcción de verdad histórica y algunas medidas de reparación a las víctimas; en tercer lugar se encuentran los

perdones responsabilizantes: este tipo de perdón busca hacer posible un equilibrio entre justicia y perdón, garantizando la reconciliación e individualización de responsabilidades, exigiendo mediante una comisión de verdad la total confesión de los crímenes cometidos y ciertas reparaciones, al igual que algunos perdones individuales y condicionados por algunos crímenes; por último están las *transiciones punitivas*: su lógica dicta que solo por medio del castigo de los responsables es posible dar paso a un nuevo orden democrático cimentado en el respeto por los derechos humanos, por lo cual se establecen tribunales ad hoc para castigar a los culpables. (Uprimny, 2006, pág. 23)

La segunda tipología por su parte, según el procedimiento que fue empleado para diseñar el proceso de justicia transicional, permite enmarcar los procesos transicionales también en cuatro tipos:

El primero es la *justicia impuesta*, que es cuando la parte victoriosa del conflicto castiga unilateralmente a los infractores de derechos humanos, con el fin de fundar en su respeto un nuevo orden democrático; el segundo son las *autoamnistías*, estas se dan cuando los victimarios se otorgan a si mismos amnistías para que la transición democrática tenga lugar, dejando impunes los crímenes cometidos contra las víctimas; (Uprimny, 2006, pág. 33) el tercero son los *perdones recíprocos*, se resultan cuando a través de un acuerdo de paz, los actores armados se conceden perdones recíprocamente con el fin de lograr una reconciliación nacional; el cuarto hace referencia a las *transiciones democráticamente legitimadas*, que se dan por medio de una negociación de paz entre los actores y donde se garantiza la participación activa de la sociedad (especialmente de las víctimas), con el fin de dotar al proceso de legitimidad democrática. (Uprimny, 2006, pág. 33)

Con respecto a la primera tipología se puede afirmar que el caso colombiano se encuentra lejos de poder ser clasificado como una transición punitiva, dado que esta implica necesariamente el triunfo militar de un actor del conflicto que instale tribunales para llevar a cabo los juzgamientos. Asimismo, este tipo de transición requiere una serie de condiciones tanto políticas como jurídicas ausentes en el país, como la existencia de un judicial fuerte y eficaz que cumpla eficientemente con la tarea de administrar justicia para que el proceso no pierda legitimidad por las dilaciones.

Por otro lado, los perdones responsabilizantes, a pesar de ser el más adecuado ya que tiene en cuenta a las víctimas por encima de cualquier actor del conflicto, tampoco se ajusta al caso colombiano. Esto, ya que si bien se “exige” una confesión completa a los desmovilizados, no hay una garantía real de ello como se explico anteriormente en este capítulo. Dado que no existe un castigo real que motive a los desmovilizados a no omitir información en sus versiones libres, impidiendo una verdadera construcción de memoria y de reparación integral a las víctimas, cuyo papel reducido y pocas garantías impiden el avance a una verdadera reconciliación.

Los perdones compensadores, siendo el tipo intermedio pueden considerarse como un proceso de justicia transicional en el sentido estricto de la palabra, puesto que incluye en la lógica de las negociaciones de paz, exigencias de justicia. Este proceso es el que más se ajusta al caso colombiano, dado que ofrece un número considerable de amnistías, pero a su vez emplea medios para compensar de cierta forma el perdón otorgado a los responsables a través de la construcción de verdad histórica y algunas medidas de reparación a las víctimas. Sin embargo, es necesario aclarar que en el caso colombiano se hace referencia a una aplicación de este modelo bastante limitada. Lo anterior, ya que se sacrifica el castigo de los responsables a cambio de garantizar derechos de las víctimas a la verdad y reparación. En suma, el sacrificio de este imperativo resulta bastante criticable tanto política como éticamente hablando, ya que el castigo es entendido como “fundamental para el éxito durable de un proceso de paz, ya que impide el surgimiento de un sentimiento de impunidad en la sociedad, revaloriza y empodera a las víctimas y familiares, y condena políticamente la comisión de crímenes atroces” (Uprimny, 2006, pág. 28).

Por otro lado, el proceso de discernimiento en la tipología número dos puede hacerse de forma más inmediata, dado que de entrada dos de los tipos de clasificación deben ser dejados de lado. La justicia impuesta queda excluida por la existencia de un proceso de negociación entre el gobierno y las AUC, ya que este tipo de justicia requiere necesariamente una parte victoriosa en el conflicto.

Con respecto a los perdones recíprocos hace falta únicamente ver de cerca la naturaleza de las AUC, ya que como este no pretende a través de la vía armada levantarse contra el Estado, sino todo lo contrario: a través de métodos ilegales e incurriendo en el

camino de la guerra, pretendía proteger el estado vigente de las cosas. Entonces surge la alternativa de calificar el caso colombiano de autoamnistía. Dada la naturaleza *paraestatal* de estos grupos armados al margen de la Ley se puede atribuir responsabilidad al Estado bien sea por acción directa, omisión o aquiescencia, pero dado que los responsables de los crímenes cometidos son los miembros de los grupos paramilitares y no el Estado directamente, se complejiza esta clasificación. (Aristizabal et al, 2008, pág. 191)

Por último se puede hablar de una transición democráticamente legítima. No obstante, dada la falta de participación, no solo de la sociedad civil, sino también de varios actores nacionales e incluso la falta de acompañamiento por parte de la comunidad internacional al proceso como se mostró en el capítulo anterior, tampoco permite un encasillamiento fiel en este tipo de transición.

La complejidad del caso colombiano es entonces un factor determinante a la hora de analizar la naturaleza ya descrita del proceso de justicia transicional. Se trata de un proceso viciado desde su estado de gestación, concebido para sopesar la disyuntiva entre justicia y paz a través del sacrificio del imperativo de castigo. Esta decisión, junto con las prebendas concedidas por el marco jurídico a los desmovilizados, es una de las principales causas de los casos de impunidad en el departamento de Antioquia y en general de todo el país.

Como consecuencia de esto, para agosto del 2006 del total de los 2.952 miembros de grupos paramilitares postulados para la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (UNJP) – 2.927 miembros y 25 ex comandantes –, únicamente el 18% (694 ex combatientes) se encontraban en un centro de reclusión. (Fundación Ideas para la Paz, 2009, pág. 1) Asimismo, de las 1.626 personas que iniciaron su versión libre, 1.189 no continuaron con el proceso, dado que la Fiscalía General de la Nación afirmó no tener los elementos para acusar a estos de un delito grave. Para diciembre de 2007, se había dado inicio a 1.057 versiones libres, de las cuales 941 se descontinuaron por la misma razón. Dejando así para finales del 2008, 430 postulados que continúan rindiendo su versión libre y únicamente la finalización de siete versiones libres por confesión de todos los delitos. (Naciones Unidas, 2009, pág. 16)

En Antioquia para inicios de 2009, aún no existía ninguna condena contra los paramilitares sometidos al proceso y las que se dieron parcialmente, no fueron aceptadas

por la Corte Suprema de Justicia. (Vargas, citado por: VerdadAbierta, 2009, párr. 7) La inexistencia de fallos que responsabilicen a los jefes de los grupos paramilitares muestra un menoscabo de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Ligado a lo anterior se encuentran hechos como la no investigación por parte de la Fiscalía de los crímenes cometidos por el Bloque Metro comandado por alias “Doble Cero”, que registra cerca de 25.000 víctimas en Oriente, Nordeste antioqueño y la ciudad de Medellín. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014, párr. 26) Lo anterior, dado que este fue exterminado por parte el Bloque Cacique Nutibara en el oriente antioqueño, dejando en la impunidad masacres como la primera y tercera Yolombó (1998 y 2001)²². Un caso similar es el de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, en el cual la muerte de varios de sus líderes en la década de los 80 y el silencio de los sobrevivientes, se calculó en 2009, que dejaría un saldo de 700 a mil crímenes sin solución. (VerdadAbierta, 2009, párr. 2)

Así mismo, los crímenes del Bloque Cacique Nutibara se encuentran aún en la impunidad, dado que de esta máquina de guerra únicamente se postularon siete desmovilizados²³ (además de alias “Don Berna”), los cuales recibieron sentencia hasta el 2013. Esta decisión les excluía de los beneficios de justicia transicional, argumentando que no confesaron la verdad en su totalidad, no entregaron bienes para reparar a las víctimas y que algunos de ellos seguían delinquiendo, la cual fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, decisión fundamentada en que los magistrados excedieron sus funciones, ya que la facultad de excluir a los postulados del proceso de justicia transicional solo la tiene la Fiscalía General de la Nación. (VerdadAbierta, 2014, párr. 6 – 10)

La situación de Diego Fernando Murillo Bejarano conocido como “Don Berna”, líder del Bloque Cacique Nutibara y Héroes de Granada, quien tuvo entre 13.000 y 32.000

²² “Los ex integrantes del Bloque Metro, Rolando de Jesús Lopera, alias 'Milton', y Néstor Abad Giraldo Arias, alias 'El Indio', decidieron acogerse a sentencia anticipada ante el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia por los hechos ocurridos el 31 de agosto de 1999, la segunda masacre de Yolombó” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014, párr. 28).

²³ Alexander Mejía Ocampo, Edilberto de Jesús Cañas, Édgar Alexander Erazo Guzmán, Juan Fernando Chica, Juan Mauricio Ospina Bolívar, Néstor Eduardo Cardona y Wander Ley Viasus Torres. (VerdadAbierta, 2014, párr. 5)

víctimas registradas, producto de atentados, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, entre otros²⁴, no arroja un panorama alentador para las víctimas. (Centro de Memoria Histórica [CMH], 2012, pág. 530) Lo anterior, dado que después de presentar cinco versiones libres en el país, en mayo del 2008 fue extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y seguir delinquiendo después de su desmovilización.

Un caso similar es el de Ramiro Vanoy Murillo “Cuco Vanoy”, líder del Bloque Mineros que ejercía influencia en el Bajo Cauca antioqueño, culpable de las masacres en El Aro y La Granja en 1996, (VerdadAbierta, 2009, párr. 12) quien fue extraditado a Estados Unidos también en mayo de 2008. Allí el exjefe paramilitar continúa la rendición de sus versiones libres por Justicia y Paz, pero afronta una pena de 24 años por delitos de narcotráfico y lavado de activos. (VerdadAbierta, 2011, párr. 16)

Por otro lado, el caso del bloque Suroeste también resulta emblemático, dado que de los 132 desmovilizados del bloque, únicamente tres se postularon a Justicia y Paz, siendo los únicos que están confesando crímenes y contribuyendo con la Justicia. (elColombiano.com, 2009, párr. 1) Esta situación podría dejar en impunidad cerca de 471 casos de desapariciones forzosa y un número similar de asesinatos, dado que ni siquiera el líder de este bloque: Jesús Durango, alias “René”, se postulo a la Ley 975 y es él quien por responsabilidad de mando debería responder por los crímenes mencionados.

Estos ejemplos resultan ilustrativos de la forma en que se dieron los casos de impunidad en el departamento y en general en todo el país, los cuales obedecieron a diferentes razones. En un primer lugar esta la falta de investigación de crímenes por parte de la Fiscalía debido al homicidio de los responsables, impidiendo tanto el esclarecimiento de los hechos y el efectivo cumplimiento de una pena privativa de la libertad por los crímenes cometidos, como es el caso del Bloque Metro y de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio.

En segundo lugar se encuentran los casos de impunidad ocasionados por dilaciones en el proceso de administración de justicia, en donde se ve la clara inclinación de la balanza a favor de los desmovilizados, quienes pueden cumplir su periodo de pena alternativa sin que sea proferida la sentencia por sus crímenes. Del mismo modo, se puede observar como

²⁴ Para mayor información consultar: Los secretos de “Don Berna” en Semana.com. 2007.

a pesar de la omisión de crímenes en sus confesiones, excluir a los ex combatientes de Justicia y Paz no es tarea fácil, situación ilustrada por el caso del bloque Cacique Nutibara.

En tercer lugar, la extradición de los grandes jefes paramilitares a Estados Unidos como “Don Berna” y “Cuco Vanoy”, devela un sacrificio enorme en materia de verdad y reparación para las víctimas, priorizando la responsabilidad de los jefes extraditados ante la justicia de otro país. Sin embargo, no solo se está pasando por encima de las víctimas, también se está pasando por encima de la justicia ordinaria colombiana, que debe ser la encargada de juzgar a las personas excluidas del proceso de Justicia y Paz.

Por último se encuentran casos como el del bloque Suroeste, los cuales cuentan con un número muy reducido de postulados a Justicia y Paz y que son en últimas los únicos que están respondiendo a las víctimas por los crímenes que les son atribuidos. Este caso resulta preocupante, dado que para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación una de las razones por las que prácticamente no hay desmovilizados del bloque Suroeste postulados a Justicia y Paz, es porque muchos paramilitares se desmovilizaron en diferentes bloques a los que pertenecían realmente, con el propósito de evadir crímenes, y sus deberes con las víctimas y con la justicia, asumiendo únicamente su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir. (elColombiano.com, 2009, párr. 8 – 9)

Se puede ver como no se trata únicamente de un proceso viciado desde su estado de gestación, de dilaciones en los procesos, de una tarea titánica para la Fiscalía para la investigación y esclarecimiento de los hechos. Se trata también del sacrificio de los imperativos de verdad y castigo dependiendo del caso, de la cantidad de prebendas que inclinan la balanza a favor del desmovilizado frente a las víctimas, de la facilidad con que estos evaden responsabilidades y la dificultad de excluirlos de Justicia y Paz. En suma, los casos de impunidad en el departamento obedecieron a diferentes dinámicas como se ilustró anteriormente.

Es pertinente aclarar que el grado de impunidad varía de acuerdo al bloque, pero que es una constante. Muestra de ello es el caso de alias “El Alemán”, ex jefe del bloque Elmer Cárdenas, quien debía responder por el secuestro de Piedad Córdoba, 44 homicidios, 56 desapariciones, 194 casos de desplazamiento forzado y 12 de reclutamiento de menores

(ElEspectador.com, 2014, párr. 1) y que actualmente se encuentra en libertad²⁵. Lo anterior, provocó un descontento entre líderes de víctimas como Amparo Mejía, integrante de Madres de la Candelaria, quien afirma que estas decisiones son preocupantes, pues muchos de los afectados por este bloque paramilitar se encuentran aún esperando la verdad de los hechos y con la salida de alias “El Alemán”, permanecerán sin saber lo que realmente sucedió. (ElPaís.com.co, 2015, párr. 8 – 9)

De hecho, según una encuesta realizada por Fundación Social (2009, pág. 133) a 22.372 hogares afectados por los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia, muestra que el 60% del total encuestado considera que no se está esclareciendo judicialmente la verdad por los crímenes de los que fueron víctimas. Es mas, de esta misma población encuestada, el 69% afirma que sus agresores no se encuentran declarando sus delitos ante la fiscalía. (Fundación Social, 2009, pág. 134)

Ante este panorama, se hace evidente la situación de desventaja y descontento de las víctimas con la labor de administración de justicia que se lleva a cabo al interior del proceso de Justicia y Paz, pues son muchos los factores que han llevado al departamento a sufrir de un alto grado de impunidad. La dilación en los procesos, la falta de tiempo para llevar a cabo las investigaciones por parte de los fiscales, la cantidad de beneficios otorgados a los desmovilizados por parte de la misma Ley 975 como se mostró anteriormente, pasando por la extradición de jefes paramilitares y la no investigación de crímenes por la muerte de los responsables permite que se genere y acentúe un sentimiento de impunidad que genera malestar en la población.

Este sentimiento de impunidad y descontento, sumado a la actitud de desconfianza y rechazo hacia los desmovilizados en la etapa de reinserción a la comunidad (como se explicó en el capítulo anterior), representan una fisura en el proceso, a través de la cual se escapa la posibilidad de alcanzar un verdadero y efectivo fin del conflicto. Esta situación lleva al aumento de las tensiones entre los desmovilizados y sus comunidades de acogida,

²⁵ Alias “El Alemán” consiguió su libertad debido al cumplimiento de la pena alternativa de 8 años, la entrega de bienes para la reparación de víctimas, contribución a la verdad y esclarecimiento de los hechos, asistencia constante en procesos de resocialización y colaboración con la justicia en 604 audiencias, así como la confesión del lugar de al menos 70 cadáveres ubicados en fosas comunes en el Urabá antioqueño. (ElPaís.com.co, 2015, 4 – 7)

frente a la cual los ex combatientes viendo purgadas sus penas o habiendo evadido su responsabilidad ante la justicia consideran volver a la ilegalidad como una forma sugestiva de vida, donde conocen el negocio, los contactos y en ultimas son considerados mano de obra calificada.

La falta de rigurosidad del judicial en la recolección de información sobre corredores de droga, contactos en negocios ilícitos y ubicación de cultivos, juega a su vez un papel fundamental en el surgimiento de nuevas estructuras armadas en Antioquia. Dado que al no dismantelar los negocios ilícitos que motivan económicamente a los grupos armados en el territorio, el vacío generado por la desmovilización de estructuras paramilitares en el departamento permite que surjan nuevos actores armados con el suficiente poder e influencia para tomar control del negocio como se muestra en el siguiente capítulo.

3. SURGIMIENTO DE LAS BACRIM EN ANTIOQUIA, CONVERGENCIA DE CONDICIONES FAVORABLES

El surgimiento de nuevas estructuras armadas en el país, denominadas Bandas Criminales Emergentes (Bacrim), se dio una vez finalizado el proceso de desmovilización con las AUC en 2006. Las Bacrim se dedican principalmente al desarrollo de actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos, como de depredación subsidiaria de los mismos, y con frecuencia emplean la violencia como mecanismo de delimitación de áreas de influencia específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros, con el propósito de mantener las condiciones necesarias para continuar sus actividades delictivas. (Suárez, sf, pág. 1)

Estos grupos son considerados como sucesores de los paramilitares, lo que se debe principalmente a que las Bacrim, al igual que las AUC, se encuentran estrechamente vinculados a actividades delictivas como la extorción, contrabando, narcotráfico y lavado de activos. (Human Rights Watch, 2010, pág. 26) Adicionalmente, estas agrupaciones delincuenciales cuentan al interior de sus filas con algunos combatientes rasos desmovilizados o no de la AUC y algunos de estos grupos son liderados por ex mandos medios. (CNRR, 2007, pág. 16) En Antioquia, según datos de la ACR, 1627 desmovilizados han reincidido en actividades delictivas²⁶. (Ocampo, 2014, pág. 24)

No obstante, la mayoría de estas nuevas agrupaciones carece del componente contrainsurgente que caracterizaba a las AUC e incluso, en algunos casos se han llegado a aliar con guerrillas como el ELN y las FARC con fines de narcotráfico. (Human Rights Watch, 2010, pág. 33)

El presente estudio le da una especial atención a los grupos de esta índole que durante el periodo de 2006 a 2008 se establecieron en las subregiones de Urabá, Bajo

²⁶ Se ha registrado que los municipios con mayores casos de reincidencia son: “Medellín (884 eventos), Bello (76), Tarazá (70), Caucasia (61), Necoclí (59), Turbo (54), Puerto Berrío (44), Apartadó (35), Cáceres (35) y Carepa (30)” (Ocampo, 2014, pág. 24).

Cauca y Magdalena Medio en el departamento de Antioquia. Siendo estos: Los Urabeños, Los Rastrojos y Los Paisas²⁷.

Anteriormente conocidos como Los Héroes de Castaño y luego como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Urabeños eran liderados por Daniel Rendón, alias “Don Mario”, miembro no desmovilizado de las AUC y hermano del ex líder del Bloque Elmer Cárdenas Freddy Rendón, alias “El Alemán” hasta su captura a principios de 2009. (Human Rights Watch, 2010, pág. 37) Para ese año contaban con presencia en nueve departamentos y 79 municipios, con un total de 1.120 miembros. (Human Rights Watch, 2009, pág. 37)

Los Paisas están compuestos principalmente por ex combatientes desmovilizados del Bloque Mineros y estaban comandados por Fabio León Vélez hasta su asesinato en 2009. (elColombiano.com, 2009, párr. 1) A este grupo ilegal se vincula con el ex líder paramilitar extraditado “Don Berna” y con la llamada Oficina de Envigado y para 2010 contaba con 415 miembros, con presencia en 45 municipios y 7 departamentos. (Human Rights Watch, 2010, pág. 38)

Los Rastrojos fueron liderados por Antonio Calle Serna, alias “El Doctor”, hasta que este se entregó a la DEA en 2012. (ElEspectador.com, 2012, párr., 1) Este grupo ha estado vinculado con narcotraficantes del Norte del Valle, con alias “Jabón” y con el líder paramilitar desmovilizado Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”. Para el 2010 contaban con 1.394 miembros y presencia en 10 departamentos y 50 municipios. (Human Rights Watch, 2010, pág. 38)

Una vez dicho esto, es pertinente aclarar que el surgimiento de estos tres grupos en el departamento se debe a diferentes características como se muestra a lo largo de este capítulo.

3.1. Importancia estratégica del departamento y las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio

²⁷ La presencia de estos tres grupos se da tanto en Urabá como Bajo Cauca antioqueño, mientras que en el Magdalena Medio solo se encuentra la presencia de dos: Los Urabeños y Los Rastrojos. (CNMH, 2014a, pág. 65)

El departamento de Antioquia se encuentra al nordeste de Colombia y limita con el mar Caribe y los departamentos Córdoba y Bolívar; por el este, con Santander, Boyacá y Bolívar; por el sur, con Caldas y Risaralda; y por el oeste, con el Chocó. (Fonade, sf, pág. 3) Dada su presencia tanto en la cordillera Occidental como en la central, Antioquia se establece como un departamento con un importante recurso hídrico por la localización de diferentes valles de los ríos Magdalena, Atrato y Cauca.

Su geografía desigual facilita la presencia de diferentes condiciones climáticas, lo cual ha configurado la actividad económica del departamento en torno a la agricultura y la minería. Asimismo, se establece un importante desarrollo industrial en las áreas metropolitanas y actividades ganaderas arraigadas específicamente en las subregiones de Urabá, Caños del Cauca, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Urrao. (Fonade, sf, págs. 4 – 6)

El departamento cuenta con un posicionamiento estratégico dado a que es un corredor que comunica a varios departamentos y capitales mediante carreteras (Bogotá-Medellín) y vías fluviales como el Río Magdalena. Dicha característica es explotada para la distribución de estupefacientes tanto a nivel nacional como internacional. (Vicepresidencia de la República, 2001, citado por: CNMH, 2014a, pág. 41)

Estos atributos han sido aprovechados por diferentes grupos armados. Muestra de ello es que Antioquia cuenta con alta presencia de grupos paramilitares desde la década de 1970, quienes aprovecharon estos círculos económicos que permiten trazar rutas desde el centro de Antioquia a diversas zonas del país, lo que significa un importante punto de control de los cursos de embarque y protección de los negocios ilícitos. (Corporación Nuevo Arco Iris, 2007, págs. 90 – 95) Por tanto, los conflictos por el control de la zona entre Bandas Criminales Emergentes como los Rastrojos, Los Paisas y Los Urabeños, son habituales. (CNMH, 2014b, pág. 190)

El Magdalena Medio posee el 7,6% del área total del departamento de Antioquia, se conforma por seis municipios ribereños y cuenta solo con el 1,8% de la población departamental. Aun cuando su extensión es solo de 4.777 km², esta región es estratégica en Colombia dada su localización en el corazón del país, pues permite la conexión entre distintas ciudades de gran importancia económica tales como Medellín y Bucaramanga.

Además gracias a su ubicación frente al río Magdalena y su geografía física, esta sub-área del departamento de Antioquia posee diversas vías de acceso por medios fluviales, terrestres y aéreos, que posibilitan tanto el desarrollo del comercio como el flujo de bienes en el país. De hecho, en este territorio se encuentra la Troncal del Magdalena, carretera estratégica y necesaria para el transporte de bienes y servicios de Bogotá hacia otras ciudades y viceversa. (LOTA, sf, pág. 40)

Sumado a ello, es una zona rica en recursos naturales tanto renovables como no renovables, tales como el petróleo y el oro; predomina una actividad económica ganadera, agropecuaria y fuertemente enfocada en la explotación minera de calizas y mármoles.

Ahora bien, aunque el presente escrito estudia concretamente el Magdalena Medio antioqueño, es preciso tener en cuenta que dicha región no se limita por jurisdicciones departamentales: “la zona ha sido determinada por estrategias encaminadas a la consolidación de zonas de defensa y de protección de recursos minerales, del latifundio, la ganadería y de empresas privadas, en relación con la presencia e impacto histórico de la acción de grupos insurgentes” (Trujillo citado por CNMH, 2014a, pág. 41). Así pues, la región se ha establecido como un corredor estratégico para el mantenimiento de economías legales e ilegales de grupos como Los Rastrojos y Los Urabeños, en especial en el municipio de Puerto Berrío²⁸, (CNMH, 2014a, pág. 155) muestra de ello es que para 2008, Los Urabeños controlaban el negocio de tráfico y extorciones en este municipio. (CNMH, 2014a, pág. 59)

La complejidad de la subregión es notable, ya que las consecuencias del conflicto armado se han configurado tanto en la tenencia de la tierra como en la configuración misma de la población que allí reside. Esto mantiene una desigualdad entre el área rural y urbana del Magdalena Medio tanto en densidad poblacional como en la calidad de vida, ya que el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños hacen parte de la dinámica violenta que se ejerce en el territorio. Esto se ve principalmente en el municipio de Yondó, donde la disputa por el territorio se ha expresado “en los frecuentes enfrentamientos, masacres y

²⁸ “El municipio de Puerto Berrío es el centro urbano comercial, de acopio y de servicios más importante de la subregión; es punto de conexión del departamento para el intercambio comercial hacia el centro del país y la Costa Atlántica” (Lota, sf, pág. 29).

muerdes selectivas que han dado pie a la movilización forzada de familias e individuos, y que además históricamente se ha constituido como un receptor de población de la subregión” (LOTA, sf, pág. 24).

Consecuentemente, Magdalena Medio se establece como una sub-área estratégica no sólo por su riqueza agroindustrial y mineral sino también por su estratégica ubicación en el centro del país entre diversas vías de comunicación. Pese a ello, se presenta como un reto para el Estado colombiano, pues la constante disputa y control territorial por parte de los grupos al margen de la ley en la región han impedido su desarrollo y han victimizado a la población civil.

Por su parte, el Urabá antioqueño tiene una extensión de 11. 664 km² y se ubica en la zona noroeste del país con una distancia mínima de 261 km de la ciudad de Medellín. (Departamento Administrativo de Planeación, sf, pág. 12) Sus límites geográficos se extienden desde el valle del Sinú hasta la frontera con Panamá²⁹, limita con Choco en el sur, con Córdoba en el oriente y es la única sub-región costera del departamento de Antioquia al tener salida al Mar Caribe, complemento ideal de su caudalosa red hídrica compuesta por los ríos Atrato y León, que desembocan en el Golfo de Urabá.

El Urabá Antioqueño cuenta con un extenso complejo orográfico en la Serranía de Abibe que ostenta una gran biodiversidad, pero también dificulta el control estatal. Lo cual es preocupante debido a que el control sobre la región es vital, pues esta es transversal para el futuro desarrollo económico del país al ubicarse “en el cruce de ejes viales y de integración económica, como Autopistas de Montaña, Autopista de las Américas, vía Panamericana” (Departamento Administrativo de Planeación, sf, pág. 13).

Las principales actividades económicas de Urabá son relativas al sector Agropecuario, Silvicultura y Pesca. (Departamento Administrativo de Planeación, sf, pág. 12) Adicionalmente, las cualidades climáticas favorecen el cultivo de amapola, palma africana, coca, banano y la ganadería extensiva. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2004, pág. 2) Ahora bien, debido a que la zona abarca el Golfo de Urabá y cuenta con salida al océano Atlántico, su localización geográfica no solo es

²⁹ De la región del Urabá, antioqueño hacen parte los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Turbo Arboletes, San Juan de Urabá, Apartadó, Carepa, Mutatá, Murindó, Chigorodó y Vigía del Fuerte.

provechosa para las exportaciones e importaciones de los bienes mencionados, sino también para el tráfico de armas, drogas ilícitas e insumos químicos con Centroamérica y Panamá. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2004, pág. 2)

En los ámbitos sociales cuenta con una población heterogénea dado que en la subregión habitan comunidades afro-descendientes en Murindó, Urrao y Turbo titulados colectivamente por la ley 70 y hay presencia de alrededor de 17 resguardos indígenas en la región. (Departamento Administrativo de Planeación, sf, pág. 12) No obstante, toda la población sufre de bajos niveles de calidad de vida (57,3% según el censo de 2007) y en cuanto a servicios públicos no se cuenta con gas natural, solo el 70,4% de las viviendas poseen acueducto, el 26,4% poseen teléfono y el 52,3% poseen alcantarillado. (Departamento Administrativo de Planeación, sf, pág. 12)

Por otro lado, el Urabá se perfila como un territorio estratégico porque sirve de zona de refugio y corredor estratégico hacia el Bajo Cauca antioqueño, el Nudo de Paramillo y el Valle del Sinú. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2004, pág. 2) Esta presencia de recursos naturales vulnerables a la extorsión y localizaciones montañosas que favorecen el desarrollo militar de organizaciones armadas y de sus economías ilegales, constituye la razón de enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control del territorio.

Por tanto, desde los años ochenta se evidencian constantes disputas por el control territorial entre guerrillas (ELN, EPL y FARC), grupos paramilitares (Bloque Elmer Cárdenas Y Bloque Bananeros) y mas recientemente Bacrim (los Urabeños).

Por último, el bajo Cauca antioqueño cuenta con un área total de 8.485 km², lo que corresponde al 13,5% del total departamental y está atravesado por el río Cauca y Nechí, constituyendo sus mas importantes arterias fluviales. Se encuentra ubicado al nordeste del departamento, en las últimas estribaciones de la cordillera Central, zona comprendida por las serranías de Ayapel y San Lucas, en límites con los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. (Departamento Administrativo de Planeación, 2009, pág. 13)

El Bajo Cauca es la subregión antioqueña que presenta los indicadores de malla vial mas bajos del departamento, dado que cuenta únicamente con 67km de vías primarias, lo que ha significado un bajo nivel de accesibilidad a áreas rurales, incidiendo en el

aislamiento de la población. (LOTA, 2011, pág. 22) Por tanto, las vías de acceso fluvial, principalmente las del río Nechí se han perfilado como una alternativa ante los bajos niveles de conectividad en las áreas rurales.

Conforme a lo anterior, la población se ha establecido principalmente en torno a la Troncal Occidental, ribera del río Cauca (Tarazá, Caucasia y Cáceres) y a la ribera del río Nechí (El Bagre, Zaragoza y Nechí), siendo Caucasia el municipio más importante, pues concentra la gran mayoría de la población, con 99.297 habitantes y es considerada la capital del Bajo Cauca, seguida por El Bagre con 47.875 habitantes. (LOTA, 2011, pág. 24) De hecho, en los últimos años se ha presentado un creciente nivel de localización de la población en estas dos áreas urbanas, mostrando un desequilibrio en la ocupación del territorio, manifestado en que el 72% de la población urbana del departamento se concentre en la metrópoli regional. (LOTA, 2011, pág. 20)

Esta situación se ha producido principalmente por la convergencia de dos factores. En primera instancia, la situación de aislamiento en la que se encuentran las zonas rurales del Bajo Cauca, dado que la baja conectividad a la que se encuentran sometidas ha derivado a su vez en que el desarrollo de los centros urbanos no se difunda, dejando al resto del territorio marginado. (LOTA, 2011, pág. 20) En segunda instancia, estos flujos migratorios se han debido en gran medida a la concentración en la propiedad de la tierra, asociada principalmente a ganadería extensiva y explotaciones mineras – siendo estas dos últimas, junto con la pesca y silvicultura, las actividades económicas que más se desarrollan en la subregión –. (Departamento Administrativo de Planeación, 2009, pág. 15 – 16)

No obstante, en esta dinámica el conflicto interno ha jugado un papel fundamental, ya que ha contribuido en gran medida a aumentar dicha desigualdad y a aumentar los flujos migratorios, ya que para 2007 se presentaron 5.107 casos de desplazamiento forzado en el Bajo Cauca. (Restrepo, 2015, pág. 16) Adicionalmente, la presencia histórica de grupos armados en la zona, como el Bloque Mineros de las AUC, sumado al aislamiento que presenta la zona y a la concentración de la tierra ha facilitado el uso de la misma para la siembra de cultivos ilícitos, los cuales han sido una constante en el Bajo Cauca desde principios de la década de los 80. (Departamento Administrativo de Planeación, 2009, págs. 15 – 16) Consecuentemente, el dinero proveniente de los cultivos y negocios ilícitos, es

empleado, por lo general, para la adquisición de tierras, la reproducción de sus actividades ilícitas y ampliamiento de su area de influencia. (Departamento Administrativo de Planeación, 2009, pág. 15)

De esta manera, el Bajo Cauca se perfila como una zona importante para los grupos armados ilegales, dado que constituye un punto de difícil acceso que cuenta con grandes extensiones de tierra aptas para la proliferación de negocios como la siembra de cultivos ilícitos y la minería ilegal. Por tanto ha contado con presencia de grupos como el Bloque Central Bolívar, Bloque Nordeste y Bloque Mineros, distintos frentes de las FARC – EP y más recientemente los Rastrojos, Los Paisas y Los Urabeños, siendo foco de “disputa por el control de economías lícitas e ilícitas o recursos estratégicos para su funcionamiento” (CNMH, 2014b, pág. 190).

3.2. Ausencia estatal en el territorio, ambiente oportuno para la consolidación de nuevos grupos armados

Las características del departamento y de las subregiones objeto de estudio, ponen de manifiesto la necesidad de contar con una presencia total e integral del Estado. Mas aún, posterior a las desmovilizaciones masivas de los bloques de las AUC que ejercían influencia en el territorio. Lo anterior, con el propósito de evitar un posible rearme y consolidación de nuevas estructuras armadas en diferentes subregiones del departamento.

No obstante, la respuesta del Estado ante este panorama no se presentó en las proporciones necesarias para llenar estos vacíos de poder³⁰. No se presentó un aumento en la cobertura de servicios básicos a las zonas municipales del departamento, ya que para el 2005, en todos los municipios del Bajo Cauca, así como en municipios como Yondó en el Magdalena Medio y Turbó y Mutatá en Urabá registraban un porcentaje entre 50% y 70% de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Municipios como Necoclí y San Pedro de Urabá presentaron un porcentaje entre 70% y 80% de personas con una o más

³⁰ Un vacío de poder puede ser definido como una situación en la que nadie posee el control en términos de poder físico y donde nadie cuenta con una legitimidad reconocida. (Tonnesson, 2007, pág. 116)

necesidades insatisfechas, mientras que otros como Murindó, también en Urabá presentaron un porcentaje entre 80 y 100% de personas en esta condición (Ver anexo 1).

Ahora bien, al comparar estas cifras con las del 2010, se puede observar que el panorama no ha variado notablemente y que en muchos municipios sigue siendo el mismo. De hecho, en cuanto a NBI la única variación frente al 2005, fue experimentada en el municipio de San Pedro de Urabá, donde el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas paso a oscilar entre el 80 y 100% (Ver anexo 2). La respuesta del Estado en garantizar a la población las condiciones básicas para su subsistencia es por tanto, deficiente, dado que perpetúa el estado de aislamiento de las áreas rurales del departamento y les vuelve un lugar propicio para el surgimiento y consolidación de nuevos grupos armados ilegales, ya que esta situación de abandono muestra a todas luces la ausencia del Estado en esta parte del territorio.

De hecho, la ausencia del Estado en la zonas rurales del departamento y la presencia de los grupos armados ha sido tal, que ha permitido que algunas personas después de ser víctimas de algún grupo armado, acudan a otro en vez de al mismo Estado para dar solución a sus problemas por la vía armada. Ejemplo de esto son los siguientes testimonios:

“La guerrilla asesinó a mi mamá, yo me quedé solo, me tocó salirme de la escuela y como me quería vengar ingresé al Bloque Metro de las Autodefensas (entrevista 2, 2013)”. (Ocampo, 2014, pág. 22)

“En el 2007 los Rastrojos me desplazaron de Valdivia y yo me uní a los Urabeños con el fin de poder apoderarnos del pueblo y poder retornar a donde mi familia (entrevista 1, 2014)”. (Ocampo, 2014, pág. 22)

Ante este panorama, es obligatoria la presencia avasallante del Estado, con el fin de evitar la repercusión de las dinámicas de violencia en el departamento. Sin embargo, no hubo un aumento en la cobertura municipal por parte de la policía en el departamento de Antioquia. A pesar de que si existió un incremento del pie de fuerza por parte de la Policía Nacional, con la instalación de 18 nuevas subestaciones entre 2007 y 2008, para complementar las 341 existentes en el 2006, para el cubrimiento de 359 centros poblados

en 9 diferentes departamentos del país³¹, ninguna de estas fue instalada en Antioquia. (Policía Nacional, 2008, págs. 72 – 73)

Según la Policía Nacional (2008, pág. 73) estas nuevas subestaciones fueron ubicadas en zonas estratégicas como zonas agrícolas, productivas, fronterizas, zonas con presencia de bandas criminales y corredores de movilidad de grupos armados ilegales.

Por tanto, la decisión de dejar por fuera al departamento de Antioquia en la instauración de estas nuevas subestaciones de policía resulta inquietante, dada la importancia estratégica del departamento ya mencionada y la presencia histórica de un gran número de estructuras armadas ilegales. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en el departamento.

Consecuentemente, la ausencia de medidas que permitieran un aumento en la presencia de la fuerza pública en las zonas rurales del departamento de Antioquia resultó ser una puerta abierta para que se diera un aumento en la tasa de homicidios en diferentes municipios del departamento. Esto puede verse en municipios como: Tarazá en el Bajo Cauca, que para el 2005 presentaba una tasa de homicidios de 6/100.000 habitantes y que aumentó a 28/100.000 habitantes en 2008. Este aumento también lo experimentaron municipios como Turbó en Urabá, que presentaba una tasa de homicidios de 41/100.000 habitantes en el 2005, en 2008 se había casi duplicado, llegando a 80 homicidios por cada 100.000 habitantes; en el área del Magdalena Medio, Puerto Berrio presentaba para el 2005 la elevada cifra de 80/100.000 habitantes y para el 2008 aumentó a 112 y municipios como Yondó se mantuvieron con una cifra igualmente alta, ya que para el 2005 presentaba una tasa de 92/100.000 habitantes y para el 2008 aumento a 93 homicidios por cada 100.000 habitantes. (Medicina Legal, 2006, págs. 56 – 58) (Medicina Legal, 2008, págs. 39 – 41)

Por otro lado, además de que no existió un aumento en la presencia de la policía a nivel rural como era de esperarse, la fuerza pública adelantó operativos en el departamento que argumentan significaron fuertes golpes a las Bacrim. En Antioquia se llevaron a cabo tres operativos para inicios del 2008: la Operación República 12, que logró la incautación de 149 fusiles y la captura de 6 integrantes de Los Rastrojos; la Operación República 37, en

³¹ Amazonas, Caquetá, Cauca, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Huila y Valle del Cauca. (Policía Nacional, 2008, págs. 72 – 73)

la cual se dio de baja a Víctor Mejía, líder de “Los Nevados” y dos integrantes del grupo en Tarazá; y por último, la Operación Colombia 4 en el 2008, donde se logró la captura de otro miembro de Los Nevados, así como la captura días mas tarde de Antonio Pérez, integrante de Los Paisas. (Policía Nacional, 2008, págs. 75 – 82)

Estos operativos han constituido resultados notables según la Policía Nacional (2008, pág. 74), dado que han permitido asestar golpes contundentes contra las Bacrim y el narcotráfico. No obstante, si se tiene en cuenta que para finales del 2008, la Policía había adelantado 238 operaciones contra las Bacrim en el país y que solo tres de estas se llevaron a cabo en el departamento de Antioquia, (Policía Nacional, 2008, pág. 81) que cuenta con presencia notable de Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas, ninguno de estos operativos significó un golpe contundente que permitiera mitigar “notablemente” la presencia de alguno de estos en el departamento.

La incautación de armas a Los Paisas, así como la captura de uno de sus integrantes y la baja del líder de Los Nevados no significó un cese en sus actividades insurgentes, ni mucho menos una disminución en la influencia de esta u otras bandas criminales en la región. Lo anterior se ve reflejado en que de 2008 a 2010 se presentó un aumento en el número de bandas criminales y estructuras armadas en el departamento (Ver anexo 3).

La falta de una presencia consolidada y fuerte por parte de la fuerza pública en el territorio, acompañada de una cobertura integral en materia de servicios básicos que cobije a la población, son entonces condiciones que mostraron la dificultad del Estado para ejercer control en el territorio y permitieron la proliferación de estructuras armadas ilegales en el departamento. Mas aún, teniendo en cuenta la importancia estratégica de zonas como el Bajo Cauca, Urabá y Magdalena Medio, que contaban con basta presencia de grupos paramilitares y que posterior a su desmovilización quedaron a merced de quien tuviera la capacidad e influencia para apoderarse de estas zonas.

En este escenario se hace indispensable el control territorial por parte del Estado, no solo para frenar las dinámicas de violencia en el departamento e impedir la consolidación de nuevos actores armados, sino también para asegurar un proceso efectivo de reintegración de los desmovilizados y garantías de no repetición para las víctimas. Sin embargo, la incapacidad del Estado colombiano para realizar las reformas pertinentes al sector de

seguridad y materializar su presencia de forma integral para llenar los vacíos de poder dejados por las AUC en zonas estratégicas como Magdalena Medio, Bajo Cauca y Urabá, hicieron de este un ambiente propicio para el surgimiento de grupos armados como Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas.

4. CONCLUSIONES

Del presente estudio de caso se puede afirmar que la incapacidad del Estado en materia económica y de infraestructura para el proceso de reinserción y en materia de administración de justicia entorpeció la aplicación de la Ley de Justicia y Paz en materia de DDR y de justicia transicional. Y que esto sumado a la incapacidad estatal de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza favoreció las condiciones para que algunos desmovilizados se rearmaran y establecieran en diferentes zonas con previa influencia paramilitar en el departamento de Antioquia, como: Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

De acuerdo con lo anterior, la incapacidad del Estado es un componente transversal al surgimiento de las Bacrim en Antioquia. Dado que esta incapacidad se establece como un factor común en los tres momentos estudiados en el presente trabajo.

Las fallas estructurales en el proceso de DDR adelantado por el Estado, materializados en la etapa de reinserción y sumados a la desconfianza y discriminación por parte de la comunidad a los desmovilizados, les pone en una condición de vulnerabilidad, permitiéndoles cuestionarse sobre su estadia en el proceso y sometimiento a la Justicia. Es en este contexto que los desmovilizados tentados por ofertas de grupos armados ilegales consideran volver al negocio donde son considerados mano de obra calificada.

Por tanto, la deserción del proceso, el regreso a la ilegalidad de algunos desmovilizados y el surgimiento de nuevas estructuras armadas que cuentan con estos dentro de sus filas en el departamento de Antioquia, muestran una falta de planeación, infraestructura y ejecución en el proceso de DDR, destacando la incapacidad del Estado para adelantar la tarea.

La debilidad del andamiaje jurídico sobre el que se edificó el proceso de justicia transicional y los vicios con que este fue concebido que permitieron la apertura de diferentes rutas a la impunidad es solo una parte de la incapacidad estatal en este aspecto. Además, existe un gran vacío de información en cuanto a las versiones libres adelantadas por los desmovilizados en Justicia y Paz, lo que sumado a la casi nula participación de las víctimas aumenta el grado de impunidad y resalta la incapacidad del Estado de recolectar

información para poner al alcance de la comunidad, dificultando así que se llevara una investigación mas rigurosa en la materia.

De igual forma, el déficit de información del Estado también se manifiesta en la carencia de datos por parte de la Policía Nacional sobre su pie de fuerza y presencia a nivel rural, dado que sus informes carecen de información concreta que permita un seguimiento juicioso del aumento o disminución de su presencia en el periodo comprendido por este estudio.

No obstante, la respuesta del Estado ante este panorama tampoco se manifestó de forma adecuada. Pues su ausencia en los territorios que contaban con influencia paramilitar continuó en la etapa posterior a la desmovilización de las AUC, mostrando a todas luces su incapacidad de materializar su presencia de manera integral en su territorio. Lo cual terminó de alistar el panorama para el surgimiento de las Bacrim. De hecho, este aspecto resulta alarmante, dado que en el caso de un escenario de posconflicto sería indispensable el control territorial por parte del Estado para asegurar una efectiva ejecución del proceso de reintegración de los desmovilizados y una garantía de no repetición para las víctimas, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, surge la cuestión de si el Estado cuenta o no con la capacidad para adelantar esta tarea.

BIBLIOGRAFÍA

Capítulos o artículos en libro

Acevedo. D, et al. (2008). *Parapolítica, verdades y mentiras*. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana.

Aristizabal. L, et al. (2008). *Paramilitarismo, desmovilización y reinserción*. Bogotá: Universidad Nacional.

Corporación Nuevo Arco Iris. (2007). *Parapolítica, la ruta de la expansión y los acuerdos políticos*. Bogotá: Intermedio.

Fundación Social. (2009). *los retos de la justicia transicional en colombia*. Bogotá: Editorial Géminis.

Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means. Peace and conflict, development and civilization*. International Peace Research Institute. Oslo: Oslo (PRIO)

Herrera, D. Dueres, M & Thylin, T. (2011). *Lecciones de los programas de reintegración en el mundo*. Alta Consejería para la Reintegración. Bogotá.

Herrera, D & Gonzalez, P. (2013). *Estado del arte del DDR en Colombia frente a los estándares internacionales*. (págs.272-302) En: Colombia Internacional, NO. 77.

McMullin, J. (2013). *Ex-combatants and The Post-conflict State. Challenges of Reintegration*. Hampshire: Palgrave McMullin.

Reyes, L. (2012). *El Desmonte Parcial de las AUC y la Reconfiguración del Fenómeno Paramilitar*. Bogotá: Universidad Nacional.

Romero, N. (2003). *Paramilitares y Autodefensas 1982 – 2003*. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, S.A.

Romero, J & Gardiazabal, J. (2010). *Aspectos comparativos de la reintegración según el “deber ser” en el marco de un proceso de paz*. (págs.1-4) En: Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales · V. 5 · N. 2 · Edición N° 10 · Noviembre de 2010.

Saldarriaga, J. (2013). *Análisis de la política pública distrital para la reintegración de excombatientes de grupos armados ilegales en Bogotá en el marco de las administraciones de Luis Eduardo garzón (2004-2007) y Samuel Moreno (2008-2011)*. Bogotá: Universidad del Rosario.

Tonnesson, S. (2007). *Imperial Policy and Southeast Asian Nationalism*. En: *Filling the Power Vacuum: 1945 in French Indochina, the Netherlands East Indies and British Malayas*. (págs. 110 – 144). Abingdon: Routledge.

Uprimny, R. (2006). *Las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas de justicia transicional y el caso colombiano*. En: *¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia* (págs.17 – 53). Bogotá: De Justicia.

Weber, Max. (1919). *La política como vocación*. En: *El político y el científico*. Recuperado de: <http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf>

Artículos en publicaciones periódicas académicas

Alonso, M. & Valencia G. (2008). Balance del proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la

ciudad de Medellín (págs. 11-34). En *Estudios Políticos* (33). Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n33/n33a2>

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). *Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama pos acuerdos con AUC Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de Chocó*. Disponible en: [file:///Users/lwidinggabrielperezhernandez/Downloads/regional-caribe-antioquia-choco%20\(1\).pdf](file:///Users/lwidinggabrielperezhernandez/Downloads/regional-caribe-antioquia-choco%20(1).pdf)

Durtch, W & Holt, V. (2003). *The Brahimi Report and The Future of UN Peace Operations*. Washington D.C: The Henry L. Stimson Center.

Fundación Ideas para la Paz. (2009). *Un balance de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz*. En *Siguiendo el conflicto: hechos y análisis*, 56. Disponible en: http://archive.ideaspaz.org/images/siguiendo_el_conflicto_56.pdf

Gleichman, C. Odenwald, Wilkinson, A. (2004). *Desarme Desmovilización y Reintegración Guía teórica y práctica*. Disponible en: http://www.reintegracion.gov.co/Es/ACR/Documents/pdf_normatividad/sobre/DDR_Guia_Teorica_y_Practica.pdf

Gonzales, C. (s.f). *V informe sobre narcoparamilitares en 2010*. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-Indepaz.

Hoyos, J. (2011). *Capitales para la guerra y el testimonio en un contexto transicional. Etnografía de la producción narrativa de desmovilizados*. Documento virtual recuperado el 27 de abril de 2014. Universidad Nacional de Colombia: Bogotá. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/4989/1/TESIS_JFH_-_Biblioteca.pdf

Human Rights Watch. (2010). Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia. Disponible en: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/colombia0210spwebwcover_0.pdf

Jiménez. J. (2012). *Sobre las Cifras oficiales*. Instituto de estudios para el desarrollo y la paz. Disponible en: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Sobre-las-cifras-oficiales.pdf>

Naciones Unidas. (2014). Página oficial de misión de mantenimiento de la paz: <http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/ddr.shtml>

Ocampo, M. (2014). *Criminalidad, grupos armados y reinserción: perfiles y motivaciones*. Universidad de Medellín. Disponible en: http://revistas.udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/view/940

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2014). *El Bloque Metro llevó el terror a Yolombó*. Disponible en: http://www.hchr.org.co/acnudh/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:el-bloque-metro-llevo-el-terror-a-yolombo&catid=63:paramilitares-y-grupos-post-desmovilizacion&Itemid=91

SIGOT - Sistema de información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (2005) *Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI 2005*.

SIGOT - Sistema de información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (2010) *Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI 2005*.

Suarez. J. (S.F). BACRIM: Bandas criminales. *Observatorio de D.I.H.* Disponible en: http://www.observatoriodih.org/_pdf/bacrim.pdf

United Nations. (2006). *Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards*. New York. Disponible en: http://pksoi.army.mil/doctrine_concepts/documents/UN%20Guidelines/IDDRS.pdf

Valencia, G. (2007). Reconstrucción analítica del proceso de desarme, desmovilización y reinserción con las Autodefensas Unidas de Colombia, 2002-2007 (págs.147-191). *En Perfil de Coyuntura económica (10)*. Disponible en: <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/coyuntura/article/viewFile/2328/1900>

Villaraga, A (2014). Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama pos acuerdos con AUC Nororiente y Magdalena Medio, Llanos orientales, Suroriente y Bogotá D.C. *En Centro Nacional de Memoria Histórica*. Disponible en: <https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/eaa84fa2-a9df-44fa-898f-9771ffe4ab2f/regional-nororiente-magdalena-orientales-bogota.pdf>

Artículos en publicaciones periódicas no académicas

Arango, R. (2010, 30 Junio). Cinco años de Justicia y Paz, camino hacia la impunidad. *Razonpublica.com*. Disponible en: <http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/1210-cinco-anos-de-justicia-y-paz-camino-hacia-la-impunidad.html>

López, P (2009, 25 Marzo). Las víctimas temen por impunidad en el Suroeste. *Elcolombiano.com* Disponible en: http://www.elcolombiano.com/las_victimas_temen_por_impunidad_en_el_suroeste-MGEC_37319

Asesinado “Nito”, uno de los jefes de “La Oficina” (2009, 30 septiembre).
ElColombiano.com. Disponible en:
http://www.elcolombiano.com/purga_en_la_oficina_mato_a_nito-PIEC_58315

Así fue el dominio del bloque Mineros en el Bajo Cauca (2011, 26 Diciembre).
Verdadabierta.com. Disponible en:
<http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/3767-los-apoyos-legales-del-bloque-mineros-en-antioquia/>

Bloque Metro (S.F). *Verdadabierta.com.* Disponible en:
<http://www.verdadabierta.com/victimarios/418-bloque-metro>

Comisión Colombiana de Juristas. (2005). *SIN PAZ Y SIN JUSTICIA*. Recuperado de: http://www.coljuristas.org/documentos/boletines/bol_n6_jyp.pdf (ley)

Crímenes del Bloque Cacique Nutibara, aún sin condena (2014, 28 Octubre).
Verdadabierta.com. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/490-bloque-cacique-nutibara/5492-crimenes-del-bloque-cacique-nutibara-aun-sin-condena>

Cuco Vanoy no se acuerda de nada (2009, 22 Enero). *Verdadabierta.com.* Disponible en:
<http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/495-bloque-mineros/784-cuco-vanoy-no-se-acuerda-de-nada>

El exjefe paramilitar alias El Alemán estaría cerca de recobrar su libertad (2015, 3 Marzo).
Elpais.com.co. Disponible en:
<http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/exjefe-paramilitar-alias-aleman-estaria-cerca-recobrar-su-libertad>

El sabor agridulce que deja la desmovilización en Antioquia (2014, 26 Agosto).
Verdadabierta.com. Disponible en:
<http://www.verdadabierta.com/desmovilizados/5417-el-sabor-agridulce-que-deja-la-desmovilizacion-en-antioquia>

Expectativa en norte de Urabá por posible llegada de “El Alemán” (2015, 16 Marzo).
Verdadabierta.com. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/604-bloque-elmer-cardenas/5668-expectativa-en-norte-de-uraba-por-posible-llegada-de-el-aleman>

Inquietud con los desmovilizados (2006, 11 Julio). *Elmundo.com.* Disponible en:
<http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=24725>

Javier Antonio Calle Serna, jefe de “Los comba” se entregó a la DEA (2012, 17 Abril).
Elespectador.com. Disponible en:
<http://www.elespectador.com/noticias/judicial/javier-antonio-calle-serna-jefe-de-los-comba-se-entrego-articulo-339294>

La desmovilización: el proceso de paz (2003-2006). (s.f).*Verdadabierta.com.* Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/244-la-historia/auc/54-periodo4>

Línea de tiempo del conflicto: CRONOLOGÍA. (2015). *Semana.com* Disponible en:
<http://www.semana.com/especiales/proyectovictimas/cronologia/index2.html>

López, P (2009, 25 Marzo). Las víctimas temen por impunidad en el Suroeste.
Elcolombiano.com Disponible en:
http://www.elcolombiano.com/las_victimas_temen_por_impunidad_en_el_suroeste-MGEC_37319

Los crímenes del bloque Mineros en Ituango (2014, 29 Enero). *Verdadabierta.com*. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/violencia-sexual/5136-los-crimenes-sexuales-del-bloque-mineros-en-ituango>

Mecanismos de Justicia Transicional en Colombia (sf). *International Center For Transitional Justice (ICTJ)*. Disponible en: <https://www.ictj.org/colombia-linea-tiempo/index.html>

Mil crímenes en el Magdalena Medio podrían quedar impunes (2009, 09 Septiembre). *Verdadabierta.com*. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/487-autodefensas-campesinas-del-magdalena-medio/1634-1000-crimenes-paras-en-el-magdalena-medio-podrian-quedar-impunes>

Ortega, M. (2014, 11 Marzo). “El Alemán” detrás del terror paramilitar. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-aleman-detras-del-terror-paramilitar-articulo-479981>

¿Qué tanto ha funcionado Justicia y Paz? (2015, 2 Febrero). *Semana.com*. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/que-tanto-ha-funcionado-justicia-paz/112945-3>

¿Qué es la Justicia Transicional? (s.f). *International Center For Transitional Justice (ICTJ)*. Disponible en: <https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>

Serrano, N. (2009, 4 Julio). Refuerzan la seguridad de los desmovilizados. *El Universal*. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/refuerzan-la-seguridad-de-los-desmovilizados>

Víctimas en Antioquia reclaman agilidad en reparación judicial (2009, 05 Noviembre). *Verdadabierta.com*. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/victimas->

seccion/reconstruyendo/1934-victimas-en-antioquia-reclaman-agilidad-en-reparacion-judicial

Otros documentos

Alcaldía Mayor de Bogotá. (1991). Constitución Política de Colombia. Recuperado de:
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2005). Decreto 4760 de 2005. Recuperado de:
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18722#>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2006). Decreto 2898 de 2006. Recuperado de:
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21365#0>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2006). Decreto 3391 de 2006. Recuperado de:
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21741#>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (1996). Ley 270 de 1996. Recuperado de:
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2005). Ley 975 de 2005 (de Justicia y Paz). Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuperado de:
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161#>

Carranza, F. (2012). *La reintegración desde el municipio: el rol de las alcaldías de Bogotá y Medellín en la atención a excombatientes*. OPERA - Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública: Bogotá. Documento virtual recuperado el 21 de Marzo del 2014 de:
<http://eds.a.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=42fe0225-e71c-48f7-b244-9b691c8a8a1f%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4203>

Centro de Memoria Histórica (CMH). (2012). *Justicia y paz ¿verdad judicial o verdad histórica?*. Bogotá: Centro de Memoria Histórica. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2012/verdad_judicial_verdad_historica.pdf

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. (2007). *Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?*. Bogotá: Comisión Nacional de Reparación. Disponible en: <http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c3bc91d9-5206-400b-8eac-54606f6bfb9d/CNRR%20%20informe%20Bandas%20emergentes%202007.pdf>

Departamento Administrativo de Planeación. (2009). *Perfil de la subregión el bajo cauca*. Documento virtual recuperado el 13 de diciembre de 2015 de: http://antioquia.gov.co/antioquia-v1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf

Departamento Administrativo de Planeación. (S.F). *El Urabá Antioqueño: un mar de oportunidades y potencialidades*. Disponible en: http://antioquia.gov.co/antioquiav1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/Perfil_Subregional_Uraba.pdf

Escobedo, A. (2013). *El concepto de impunidad, su abordaje en los instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional*. (Tesis Maestría). Recuperado de: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18844/TFM_MEADH_Astrid_Escobedo_2013.pdf?sequence=1

Fiscalía General de la Nación. (2012). *Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz: esquema Ley 975*. Disponible en la página web: <http://www.fiscalia.gov.co:8080/Esquema975.htm>

Gonzalez, C. (2014). *ley 975 de 2005: ocho años después, ni justicia ni paz*. Disponible en: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2014/02/LEY-975veredicto.pdf>

La Región el Urabá Antioqueño (2004, Agosto). *Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados*. Disponible en: http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_675.pdf?view=1

Ley de “justicia y paz”: un recurso efectivo para la impunidad (2005). Comisión Colombiana de Juristas. (2005. 10 octubre).

Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia (LOTA). (S.F). *Subregión Magdalena Medio*. Disponible en: http://antioquia.gov.co/PDF2/lota/docs/cartografía/estructura_ordenamiento_territorial_MagdalenaMedio.pdf

Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia (LOTA). (2011). *Subregión Bajo Cauca*. Disponible en: http://antioquia.gov.co/PDF2/lota/docs/cartografía/diagnostico_tensiones_y_potencialidades_subregion_bajo_cauca.pdf

Medicina Legal. (2009). *Homicidio Colombia 2008*. Disponible en: <http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/34156/3+Homicidios.pdf/bbd5109d-9376-4e6f-ae02-8d0c455374bb>

Medicina Legal. (2006). *Homicidios Colombia 2006*. Disponible en:
<http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33850/4+Homicidios.pdf/fafcf8e0-38b4-41a2-96df-bc172bc78ba4>

Naciones Unidas. (2009). Informe anual del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos e informes de la oficina del alto comisionado y del secretariado general. Asamblea General de las Naciones Unidas, décimo periodo de sesiones. Disponible en:
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2571.pdf?view=1

Oficina Alto Comisionado para la Paz. (sf). *Proceso de paz con las Autodefensas – Informe Ejecutivo*. Recuperado de:
<http://www.cooperacioninternacional.com/descargas/informefinaldesmovilizaciones.pdf>. Bogotá: Oficina Alto Comisionado para la Paz.

Policía Nacional de Colombia. (2008). *Primer año de gestión 2007 – 2008*. Bogotá: Policía Nacional de Colombia. Disponible en:
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/balance_gestion/Informaci%F3n%20Institucional/Informe%20de%20Gesti%F3n%202007.pdf

Real Academia de la lengua Española (RAE). (2014). *Incapacidad*. Recuperado el 9 de octubre de 2014 de:
<http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=O6xEy52r2DXX27Gx8EKZ>

Real Academia de la lengua Española (RAE). (2014). *Infraestructura*. Recuperado el 9 de octubre de: <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=infraestructura>

Red Nacional de Información (RNI). (2015). *Registro Único de Víctimas (RUV)*. Bogotá: Red Nacional de Información. Disponible en:
<http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107>

Reseña del Departamento de Antioquia (S.F). *Fonade*. Disponible en:
<http://www.fonade.gov.co/GeoTec/inventario1/zonas/Antioquia.php>

Restrepo, D. (2015). 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' en el Bajo Cauca antioqueño. Fondo Ideas Para la Paz. Recuperado de:
<http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5617d0beece08.pdf>

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2012). *Antioquia: Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012*. Bogotá: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Disponible en:
<http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Antioquia.pdf>

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2013). Informe nacional de desplazamiento forzado en Colombia 1985 a 2012. Bogotá: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Disponible en:
<http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013.pdf>

Anexo 3. Tabla. Presencia de grupos narcoparamilitares 2008 - 2010.

Grupos narcoparamilitares 2008 - 2010 según registro de eventos en cada año						
Grupo	Informe 2008		Informe 2009		Informe 2010	
	Departamentos	Total Deptos	Departamentos	Total Deptos	Departamentos	Total Deptos
Los Rastrojos	Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Valle	6	Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Valle	14	Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Distrito Capital, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Valle	22
Los Urabeños	Antioquia, Chocó, Córdoba	3	Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Sucre	9	Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Distrito Capital, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre	17

	Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle	17	Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Distrito Capital, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle	23	Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Distrito Capital, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Valle	20
Águila Negras						
	Antioquia, Bolívar, Casanare, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Sucre, Vichada	10	Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño, Santander, Sucre	9	Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Distrito Capital, La Guajira, Magdalena, Sucre	9
Los Paisas						
	Antioquia	1	Antioquia, Atlántico	2	Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Magdalena, San Andrés y Providencia	6
Oficina de Envigado						
	Casanare, Guaviare, Meta, Santander	4	Casanare, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta, Nariño, Tolima, Vichada	8	Antioquia, Arauca, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Distrito Capital, Guanía,	14
ERPAC					Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Quindío, Vichada	

Fuente: INDEPAZ

Fuente: (González, s.f, pag.5-7)